



E.S.E Carmen Emilia Ospina
NIT. 813.005.265-7
www.esecarmenemiliaospina.gov.co

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CARMEN EMILIA OSPINA
NIT. 813.005.265-7**

**RESOLUCIÓN No. 378
11 de Agosto de 2020**

**POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL PAGO DE UNA SENTENCIA
JUDICIAL**

**El Gerente de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina en uso de
sus atribuciones legales y**

CONSIDERANDO:

Que la Ley 100 de 1993, creó las Empresas Sociales del Estado, surgiendo la ESE Carmen Emilia Ospina como una institución descentralizada del orden municipal, adscrita a la Secretaria de Salud de Neiva con categoría especial y Personería Jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, sometida al Régimen Jurídico señalado en el artículo 195 de la ley 100 de 1993, decreto 1876 de 1994, decreto 139 de 1996 y demás normas concordantes, que tiene como objetivo la prestación de servicios de salud del primer nivel de complejidad de acuerdo con los principios de eficiencia, equidad y compromiso social.

Que la ESE Carmen Emilia Ospina, con el fin de cumplir con su objeto misional se ha visto avocada a vincular el personal médico y asistencial, mediante contratos de prestación de servicio teniendo en cuenta que el personal de planta no es suficiente para garantizar la cobertura de salud en el nivel primario; en virtud de lo anterior, algunos contratistas a la finalización del vínculo contractual han presentado demandas con el fin de que declare la existencia de un contrato realidad y se reconozca y pague las prestaciones sociales derivadas de la existencia de un contrato laboral.

Que el señor FERNANDO SÁNCHEZ RIVERA, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 17.057.008 expedida en Bogotá D.C, por intermedio de apoderado

“Servimos con Excelencia Humana”

«

»

Zona Norte
Calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Teléfono: 8631818 Ext. 6025

Zona Oriente
Calle 21 No. 55-98 Las Palmas
Teléfono: 8631818 Ext. 6308

Hospital Canaima
Carrera 22 No. 26-19
Teléfono: 8631818 Ext. 6587

Zona Sur
Calle 2C No. 28-113 Los Parques
Teléfono: 8631818 Ext. 6200

Sistema de Información y Atención al Usuario 8632828 - Línea gratuita 018000943781



E.S.E Carmen Emilia Ospina
NIT. 813.005.265-7
www.esecarmenemiliaospina.gov.co

judicial presentó demanda promovida dentro del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina de Neiva, en la que pretende que se declare la existencia de un contrato realidad y como consecuencia de ello el reconocimiento y pago de los derechos laborales a que tenía derecho por haber prestado su servicio de forma personal y subordinada a través de órdenes de prestación de servicios a la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, desempeñando funciones como médico general, formulando pretensiones por valor de \$34.000.000.

Que el anterior medio de control fue adelantado bajo radicación No. 41001333300220150033502, y una vez agotadas las etapas del sumario mediante Sentencia de Primera Instancia proferida el día 20 de octubre de 2017, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva, accedió a las pretensiones de la demanda, y en consecuencia dispuso:

PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la entidad demandada.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio No. 01-TH-00485-S-2015 de fecha 4 de febrero de 2015, por medio del cual se negó la existencia de la relación laboral, el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales al señor FERNANDO SÁNCHEZ RIVERA. En consecuencia, **se declarará** que entre la parte actora y el ente demandado se presentó una relación laboral durante los periodos comprendidos del 17 de noviembre de 2010 al 20 de enero de 2012 y del 02 de febrero de 2012 al 29 de febrero de 2012.

TERCERO: CONDENAR a la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA a título de restablecimiento del derecho a reconocer y pagar a favor del señor FERNANDO SÁNCHEZ RIVERA, las prestaciones sociales, tomando como base para liquidarlas, el salario que devengaba un Médico General de planta de la entidad, o el valor de lo pactado en los contratos de prestación de servicios, si aquél es inferior, correspondientes a los periodos en los cuales se demostró la existencia de la relación laboral, es decir del 17 de noviembre de 2010 al 20 de enero de 2012 y del 02 de febrero de 2012 al 29 de febrero de 2012.

CUARTO: CONDENAR a la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA a reconocer y pagar a favor del señor FERNANDO SÁNCHEZ RIVERA los porcentajes de cotización correspondientes a salud y pensión que debió trasladar a las entidades de seguridad social durante el periodo en que prestó sus servicios. Sin embargo, si dichos pagos no se han realizado por parte del demandante, la entidad debe efectuar las cotizaciones respectivas, descontando de las sumas que se adeudan al actor el porcentaje que a este corresponda, conforme a lo expuesto en la parte motiva. (Subrayado fuera del texto original)

(...)

“Servimos con Excelencia Humana”

«-----»

Zona Norte	Zona Oriente	Hospital Canaima	Zona Sur
Calle 34 No. 8-30 Las Granjas	Calle 21 No. 55-98 Las Palmas	Carrera 22 No. 26-19	Calle 2C No. 28-113 Los Parques
Teléfono: 8631818 Ext. 6025	Teléfono: 8631818 Ext. 6308	Teléfono: 8631818 Ext. 6587	Teléfono: 8631818 Ext. 6200

Sistema de Información y Atención al Usuario 8632828 - Línea gratuita 018000943781



E.S.E Carmen Emilia Ospina
NIT. 813.005.265-7
www.esecarmenemiliaospina.gov.co

SÉPTIMO: CONDENAR, en costas a la entidad demandada por la suma de OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$800.000), conforme lo expuesto.

(...)"

Que, en su oportunidad, el apoderado de la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia y, al resolver el recurso de alzada el Tribunal Administrativo del Huila, mediante Sentencia adiada el 1 de noviembre de 2019 falla:

PRIMERO: MODIFICAR el numeral TERCERO de la sentencia dictada el 20 de octubre de 2017, por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva el cual quedará así:

TERCERO: CONDENAR a la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA a título de restablecimiento del derecho a reconocer y pagar a favor del señor FERNANDO SÁNCHEZ RIVERA, las prestaciones sociales, tomando como base para liquidarlas, el valor de lo pactado en cada uno de los contratos de prestación de servicios, correspondientes a los periodos en los cuales se demostró la existencia de la relación laboral, es decir del 17 de noviembre de 2010 al 20 de enero de 2012 y del 02 de febrero de 2012 al 29 de febrero de 2012.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia dictada el 20 de octubre de 2017, por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva, que accedió a las pretensiones de la demanda interpuesta por el señor FERNANDO SÁNCHEZ RIVERA en contra de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina.

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.

(...)

Que una vez ejecutoria la sentencia de segunda instancia, y devuelto el expediente al juzgado de origen; el Juzgado Segundo Administrativo de Neiva, el 28 de enero de 2020 procede a liquidar las costas dentro del presente asunto a cargo de la parte demandada y a favor de la parte demandante, por valor **OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CINCUENTA PESOS (\$828.050)**.

Que con el fin de adelantar las gestiones pertinentes para proceder al pago de la mencionada sentencia, mediante oficio 01-GER-030957-I-2019 de fecha 13 de diciembre de 2019, se solicitó al área de Talento Humano que efectuara la respectiva liquidación de la sentencia.

Que el día 30 de junio de 2020, mediante oficio radicado 01-GER-003167-E-2020, el señor FERNANDO SANCHEZ RIVERA, actuando en nombre propio, presenta cuenta de cobro, solicitando a la ESE Carmen Emilia Ospina, el pago TREINTA Y SIETE MILLONES VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS CON

“Servimos con Excelencia Humana”

««

Zona Norte	Zona Oriente	Hospital Canaima	Zona Sur
Calle 34 No. 8-30 Las Granjas	Calle 21 No. 55-98 Las Palmas	Carrera 22 No. 26-19	Calle 2C No. 28-113 Los Parques
Teléfono: 8631818 Ext. 6025	Teléfono: 8631818 Ext. 6308	Teléfono: 8631818 Ext. 6587	Teléfono: 8631818 Ext. 6200

»»

Sistema de Información y Atención al Usuario 8632828 - Línea gratuita 018000943781



VEINTISÉIS CENTAVOS DE PESOS (\$37.324.230,26) MCTE, por concepto de pago de sentencia judicial.

Que el día 13 de julio de 2020, se da traslado de la cuenta de cobro presentada por el actor al área de talento humano, con el fin de que verifique la liquidación y la presente con los valores actualizados.

Que el día 22 de julio de 2020, el área de talento humano mediante comunicación No. 01-TH-021446-I-2020, da respuesta a la anterior comunicación indicando que el valor total de la liquidación de la sentencia relacionado con el reconocimiento de prestaciones sociales y valor de los porcentajes de cotización correspondientes a salud y pensión que debió trasladar la entidad a las entidades de seguridad social durante el periodo en que prestó sus servicios, corresponde a la suma de VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS (\$29.426.174), suma que debidamente actualizada de conformidad con el artículo 187 del CPACA y en la parte considerativa de la Sentencia, el valor corresponde a TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS (\$39.455.919)

Que realizado el ajuste de las sumas reconocidas, más el valor de las costas correspondientes a OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CINCUENTA PESOS (\$828.050), el valor total a cancelar corresponde a la suma de **CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (\$40.283.969).**

Que hace parte de la cuenta de cobro los siguientes documentos:

- Liquidación de sentencia presentada por el actor.
- Constancia del 13 de febrero de 2020 suscrita por el Secretario del Juzgado Segundo Administrativo Oral de Neiva, mediante la cual certifica que las fotocopias aportadas son fiel reproducción mecánica de las originales que reposan dentro del medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, radicado bajo el número 41001-33-33-002-2015-00335-00, que se tramitó en dicho Juzgado.
- Fotocopia auténtica de la sentencia de primera instancia proferida el día 20 de octubre de 2017 por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva en el medio de Nulidad y Restablecimiento del Derecho promovido por FERNANDO SÁNCHEZ RIVERA.
- Fotocopia auténtica de la sentencia de segunda instancia proferida el día 01 de noviembre de 2019 por el Tribunal Administrativo del Huila en el medio de Nulidad y Restablecimiento del Derecho promovido por FERNANDO SÁNCHEZ RIVERA.
- Constancia de notificación por correo electrónico realizado el 14 de noviembre de 2019 y constancia de ejecutoria del día 20 de noviembre de 2019.

“Servimos con Excelencia Humana”

«-----»

Zona Norte	Zona Oriente	Hospital Canaima	Zona Sur
Calle 34 No. 8-30 Las Granjas	Calle 21 No. 55-98 Las Palmas	Carrera 22 No. 26-19	Calle 2C No. 28-113 Los Parques
Teléfono: 8631818 Ext. 6025	Teléfono: 8631818 Ext. 6308	Teléfono: 8631818 Ext. 6587	Teléfono: 8631818 Ext. 6200

Sistema de Información y Atención al Usuario 8632828 - Línea gratuita 018000943781



E.S.E Carmen Emilia Ospina
NIT. 813.005.265-7
www.esecarmenemiliaospina.gov.co

- Constancia secretarial de liquidación de costas dentro del proceso de la referencia a cargo de la entidad demandada y a favor de la parte demandante en la suma de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CINCUENTA PESOS.
- Auto proferido el 28 de enero de 2020, mediante el cual se aprueba la liquidación de costas llevaba a cabo por la secretaría del despacho.
- Certificación bancaria expedida por el Banco Agrario de Colombia a nombre del señor FERNANDO SÁNCHEZ RIVERA.
- Fotocopia del RUT del señor FERNANDO SÁNCHEZ RIVERA.
- Fotocopia de las planillas de pago de seguridad social durante los periodos demandados.

Que los anteriores documentos que hacen parte integral de la presente Resolución junto con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 2483 de fecha 11 de Agosto de 2020, así como el certificado de la DIAN No. 1-13-242-448-10654 del 10 de junio de 2020, en el que informa que verificado los aplicativos SIPAC CANDADO TRIBUTARIO Y ADUANERO, de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva, no figura ninguna obligación ni proceso vigente por parte de los beneficiarios del presente pago.

Que la ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva cuenta con la provisión de los recursos necesarios, previstos en el rubro No. 3202000, para atender los pagos de sentencias y conciliaciones.

Que consultado sobre la viabilidad de expedición del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal, el jefe de área de presupuesto procedió a expedir el CDP No. 2483 de fecha 11 de Agosto de 2020 para realizar el pago respectivo.

Que en virtud de lo anterior, el Gerente de la Empresa Social del Estado "Carmen Emilia Ospina de Neiva".

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Acatar la decisión adoptada por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Neiva y el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, mediante la cual se condenó a la ESE CARMEN EMILIA OSPINA dentro del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho promovido por el señor FERNANDO SANCHEZ RIVERA, adelantado bajo radicación No. 41001333300220150033502.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordénese el pago de la sentencia judicial a favor del señor FERNANDO SÁNCHEZ RIVERA, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 17.057.008 expedida en Bogotá D.C., por el valor de **CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE**

“Servimos con Excelencia Humana”

«-----»

Zona Norte Calle 34 No. 8-30 Las Granjas Teléfono: 8631818 Ext. 6025	Zona Oriente Calle 21 No. 55-98 Las Palmas Teléfono: 8631818 Ext. 6308	Hospital Canaima Carrera 22 No. 26-19 Teléfono: 8631818 Ext. 6587	Zona Sur Calle 2C No. 28-113 Los Parques Teléfono: 8631818 Ext. 6200
---	---	--	---

Sistema de Información y Atención al Usuario 8632828 - Línea gratuita 018000943781



E.S.E Carmen Emilia Ospina
NIT. 813.005.265-7
www.esecarmenemiliaospina.gov.co

PESOS (\$40.283.969), que corresponde al valor total de la condena impuesta mediante sentencia judicial, con el respectivo ajuste.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución al señor FERNANDO SÁNCHEZ RIVERA, en forma personal, si fuere posible, o por aviso, según lo mandan los artículos 67 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, instante en el cual se entregará copia íntegra, autentica y gratuita de esta decisión.


ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución no procede ningún recurso por tratarse de un acto de ejecución.

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de promulgación.

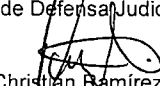
Dada en Neiva a los once (11) días del mes de agosto de 2020.


NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

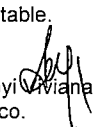
JOSE ANTONIO MUÑOZ PAZ
Gerente


VoBo. Claudia Marcela Camacho Varón
Subgerente Administrativa


VoBo. Jorge Dilson Murcia Olaya
Asesor de Defensa Judicial.


VoBo. Christian Ramírez Cardozo
Asesor de Gerencia.


VoBo. Martha Liliana Rodríguez García
Gestora Contable.


Proyectó: Anyi Viviana Manrique.
Apoyo Jurídico.

“Servimos con Excelencia Humana”



E.S.E Carmen Emilia Ospina
E.S.E Carmen Emilia Ospina
NIT. 813.005.265-7
www.esecarmenemiliaospina.gov.co
www.esecarmenemiliaospina.gov.co

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit : 813005265

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 2483

Fecha Disponibilidad: 11 de agosto de 2020
Fecha Vencimiento: 31 de Diciembre de 2020
Tipo Documento: Disponibilidad

Estado: Confirmado
Año Fiscal: 2020


EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

Que existe apropiación presupuestal disponible y libre afectación en el(los) siguiente(s) rubro(s) presupuestal(es).

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Débitos	Créditos	Valor Actual
3202000	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	01 - RECURSOS PROPIOS	3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 40.283.969	\$ 0	\$ 0	\$ 40.283.969
TOTAL:				\$ 40.283.969	\$ 0	\$ 0	\$ 40.283.969

Observaciones:

PAGO SENTENCIA JUDICIAL ADELANTADO BAJO RADICACION No. 41001333300220150033502 DECISIÓN ADOPTADA POR EL JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DE NEIVA Y EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA, A FAVOR DEL SEÑOR FERNANDO SANCHEZ RIVERA, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 17.057.008 DE BOGOTA D.C POR VALOR DE (\$ 40.283.969), SEGUN RESOLUCION No. 378 DEL 11 DE AGOSTO DEL AÑO 2020


GESTOR PRESUPUESTO
DIEGO DARIO ARAGONEZ QUIROGA

“Servimos con Excelencia Humana”

Zona Norte
Calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Teléfono: 8631818 Ext. 6023

Zona Oriente
Calle 21 No. 55-98 Las Palmas
Teléfono: 8631818 Ext. 6398

Hospital Conaima
Carrera 22 No. 26-19
Teléfono: 8631818 Ext. 6587

Zona Sur
Calle 26 No. 28-11 Los Parques
Teléfono: 8631818 Ext. 6200

Sistema de Información y Atención al Usuario 8632828 Línea gratuita 018000943781



JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE NEIVA

Neiva, veinte (20) de octubre de dos mil diecisiete (2017)

REFERENCIA:	
PROVIDENCIA:	SENTENCIA No. 102
ACCIÓN:	NULLIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	FERNANDO SANCHEZ RIVERA
DEMANDADO:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA
RAD:	41001-33-33-002-2015-00335-00

I. LA DEMANDA Y SUS ALEGATOS.

A través de apoderado judicial, el señor FERNANDO SANCHEZ RIVERA, en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A., solicitó se declare la nulidad del **Oficio No. 01-TH-00485-S-2015 de fecha 4 de febrero de 2015**, suscrito por el Gerente de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina, mediante el cual se negó el reconocimiento de la existencia de la relación laboral y el pago de las acreencias laborales adeudadas al referido señor.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó se declare que existió una relación de carácter legal y reglamentaria entre la entidad demandada y el señor FERNANDO SANCHEZ RIVERA, por el periodo comprendido entre el 17 de noviembre de 2010 y el 29 de febrero de 2012, lapso en el que se desempeñó como médico al servicio de la ESE Carmen Emilia Ospina.

Como consecuencia de lo anterior, pidió que se ordenara a la ESE demandada, el reconocimiento y pago de los emolumentos prestacionales relacionados en la demanda; así como el pago de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías, y demás acreencias de carácter prestacional a que tiene derecho el actor.

Finalmente, reclama la indexación de las sumas debidas desde la fecha en que sea reconocida la obligación de cancelar la prestación económica hasta cuando se haga efectivo su pago, de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor - I.P.C.- que certifique el DANE.

Como fundamentos fácticos de la demanda, se narró que el señor FERNANDO SANCHEZ RIVERA es médico de profesión y fue vinculado mediante diversos contratos de prestación de servicios con la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA desde el 17 de noviembre de 2010 hasta el 29 de febrero de 2012, prestando sus servicios personales bajo total dependencia y completa subordinación, en horario que alcanzaba hasta 20 horas diarias e incluso laboraba domingos y festivos, así como horarios nocturnos.

La vinculación laboral del señor **FERNANDO SANCHEZ RIVERA** con la mencionada ESE finalizó el 29 de febrero de 2012 sin ninguna justificación y sin habersele cancelado las prestaciones sociales correspondientes a la condición de Servidor Público.

Manifiesta que ante esta situación el actor elevó petición ante la ESE Carmen Emilia Ospina tendiente a obtener el reconocimiento, liquidación y pago de las prestaciones sociales y demás prerrogativas laborales a que tiene derecho.

Mediante Oficio No. 01-TH-000485-S-2015 del 4 de febrero de 2015 de Febrero de 2015, suscrito por el Gerente de la ESE Carmen Emilia Ospina, se resolvió la petición incoada, denegando las pretensiones de la misma, aduciendo la inexistencia de vínculo laboral.

Como normas violadas indica los artículos 1, 2, 6 y 53 de la Constitución Política; artículos 2, 82, 86, 136, 171, 176, 177, 178 y concordantes de la Ley 1437 de 2011.

Cita in extenso jurisprudencia del Consejo de Estado.

Como sustento jurídico de sus pretensiones, afirma que los médicos vinculados por contrato administrativo de prestación de servicios, se encuentran en la misma situación de hecho y de derecho predicable de los médicos incorporados a la planta de personal de la entidad territorial y, por consiguiente, deben recibir el mismo tratamiento jurídico que la ley reserva solamente para éstos.

Señala que el acto administrativo mediante el cual se negó al accionante el pago de los derechos salariales y prestacionales en virtud de los diferentes contratos de prestación de servicios suscritos con la entidad demandada, se encuentra viciado de falsa motivación y carencia de sustento legal (f. 1 a 34; 94 a 102 c. 1).

En los alegatos de conclusión, luego de citar y aportar amplia jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional referente a la protección del derecho al trabajo y a la primacía de la realidad sobre las formalidades en las relaciones laborales, reitera los argumentos expuestos en la demanda, en el sentido que, si bien es cierto entre el señor **FERNANDO SANCHEZ RIVERA** y la entidad demandada se suscribieron diferentes contratos de prestación de servicios para desempeñar el mismo cargo durante aproximadamente dos (2) años, se configuraron los elementos esenciales de actividad personal, continua subordinación y salario como retribución de la labor desarrollada, existiendo una verdadera relación laboral (f. 535 a 570; 571 a 573 c. 3).

II. LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y SUS ALEGATOS.

Por conducto de apoderado judicial, la ESE Carmen Emilia Ospina de Nelva, oportunamente contestó la demanda.

Se opone a todas y cada una de las pretensiones de la demanda.

Argumenta que el actor nunca mantuvo una relación laboral con la entidad que representa, pues la vinculación se realizó por medio de contratos de prestación de servicios, los cuales no fueron continuos; no estuvo el contratista

bajo dependencia y subordinación de los funcionarios de la ESE y su labor se realizó de manera independiente y autónoma, sin que hubiese cumplido horario alguno; actividades las cuales por su propia naturaleza merecieron algún tipo de coordinación con el personal de la entidad, sin que ello supusiera subordinación, cancelándose como contraprestación de las mismas unos honorarios, cuyo valor y forma de pago fueron pactados y en razón a las actividades efectivamente desarrolladas por el contratista.

Refiere que la excepcionalidad que la ley otorga a la ESE, debido a su naturaleza jurídica, encuadra perfectamente en la especialidad del servicio a proveer, pues se requería un médico, quien requiere de una capacitación especial para prestar sus servicios, como quiera que la entidad no cuenta con personal de planta suficiente para atender la demanda.

Propuso las siguientes excepciones:

"1. AUSENCIA DE CONTRATO LABORAL"

"2. FALTA DE ARGUMENTOS PARA SOLICITAR LA NULIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO"

"3. INEXISTENCIA DE CONTRATO REALIDAD"

"4. PRESCRIPCIÓN"

Señala que su representada actuó de conformidad con los parámetros que exige la ley de contratación estatal, pues contrató al doctor SANCHEZ RIVERA para prestar un servicio determinado, en razón de su experiencia, estudios, capacitación o formación profesional o técnica, los cuales realizaba de manera autónoma, sin que seguir unas pautas o instrucciones de manera coordinada para la óptima prestación del servicio signifique que existe una relación de subordinación.

Cita jurisprudencia relacionada con el tema.

Frente al hecho que el actor mensualmente recibiera un pago de dinero, señala que así estaba expresamente consagrada en el acuerdo de voluntades de las partes contratantes.

Así las cosas, solicita exonerar de cualquier tipo de responsabilidad a la entidad que representa (f. 118-a-135-c-1).

En sus alegatos de conclusión, la ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva, por conducto de apoderada judicial, manifiesta que la parte actora no probó los elementos propios y esenciales de una relación laboral, específicamente la subordinación, por lo tanto las pretensiones no están llamadas a prosperar.

Reitera que el actor no cumplía un horario ni estaba sometido a un cuadro de turnos como sí lo hacen los médicos de planta.

Que tal y como lo manifestó el propio actor, él era el único médico del centro de salud del corregimiento de Vegalarga, sin tener un jefe inmediato o superior jerárquico en el lugar que le impartiera órdenes, por lo tanto no existe prueba que acredite la subordinación.

Manifiesta que de las pruebas recaudadas se puede concluir que al ser el actor el único médico del referido centro de salud, tenía la posibilidad y facultad de fijar las citas en el horario que mejor se ajustara a su disponibilidad de tiempo, además de manera autónoma coordinaba las brigadas de salud que realizaba en las veredas aledañas con las auxiliares de enfermería, lo cual refleja la autonomía de la que gozaba el contratista.

Precisa que el hecho de rendir informes sobre la prestación del servicio no constituye un elemento de subordinación, sino que se enmarca en una relación de coordinación.

Resalta que a diferencia de los médicos de planta de la ESE, el actor contaba con diez (10) días libres al mes, de los cuales podía disponer y no estaba obligado a hacer presencia en el centro de salud de Vegalarga y si decidía permanecer en el lugar, era bajo su propia cuenta y riesgo.

Cita jurisprudencia del Consejo de Estado referente a la diferencia entre contrato de prestación de servicios y contrato laboral; esto para señalar que no necesariamente se está frente a un contrato laboral cuando se desempeñan funciones similares a las de los empleados de planta y en caso que se labore en la sede de la entidad, ello tampoco da lugar a que se declare la existencia del contrato laboral.

Para finalizar, reitera que la parte actora no probó la materialización de la subordinación como requisito indispensable para declarar la existencia de un vínculo laboral, así las cosas solicita se despache desfavorablemente las pretensiones de la demanda (f. 574 a 582 c. 3).

III. CONSIDERACIONES.

No encontrándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede el Juzgado a resolver el asunto sometido a su consideración.

3.1. De las excepciones propuestas.

En audiencia inicial celebrada el 8 de febrero de 2017¹, el Despacho indicó que las exceptivas de "AUSENCIA DE CONTRATO LABORAL", "FALTA DE ARGUMENTOS PARA SOLICITAR LA NULIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO", "INEXISTENCIA DE CONTRATO REALIDAD" y "PRESCRIPCIÓN", propuestas por la entidad demandada, como quiera que atacan directamente las pretensiones formuladas, se estudiarán en el fondo del asunto.

3.2. Problema Jurídico.

Le corresponde al Despacho decidir sobre la legalidad del acto administrativo proferido por la entidad accionada **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA**, mediante el cual se le niega al señor **FERNANDO SANCHEZ RIVERA** el reconocimiento de una relación laboral entre él y la entidad demandada, y en consecuencia resolver si el accionante estuvo vinculado mediante un contrato de prestación de servicios, o si por el contrario existió una relación laboral, caso en el cual, habría lugar a reconocer la existencia de dicha relación, en aplicación del principio de la realidad sobre las formas,

¹ Folio 483 y 484 c. 3

dando lugar en consecuencia al pago de las prestaciones sociales y demás emolumentos a que por ley tendría derecho.

3.3. Marco Normativo y Jurisprudencial.

3.3.1. EL CONTRATO REALIDAD. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL.

La Constitución Política de Colombia estableció en su artículo 53 los derechos del trabajador y le asignó al legislador la expedición del Estatuto del Trabajo, destacando la inclusión de principios mínimos como la primacía de la realidad sobre las formalidades y advirtiendo que los contratos, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana, ni los derechos de los trabajadores.

De otra parte, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública o Ley 80 de 1993, cuando se refirió a los contratos estatales, estableció un listado enunciativo de contratos, dentro de los cuales se encuentra el de prestación de servicios desarrollado en el numeral 3 del artículo 32, definiendo el legislador que son los que las entidades celebran con el fin de desarrollar actividades propias de la administración o del funcionamiento de ésta, trayendo como requisito adicional que este tipo de contratos solo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o cuando se requiera de un conocimiento especializado, sin generar en ningún caso una relación de carácter laboral.

Respecto de los elementos constitutivos de la relación laboral el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha precisado que cuando existe un contrato de prestación de servicios entre una persona natural y una entidad pública y si se llegare a demostrar los elementos propios de toda relación laboral, esto es, la subordinación, prestación personal y remuneración surge el reconocimiento de una relación laboral y consiguientemente el reconocimiento de las prerrogativas de orden prestacional.

La anterior disposición encuentra plena armonía en el mandato de irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, consagrado en el mismo artículo 53 Superior, los cuales de conformidad al artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo "son de orden público y, por consiguiente, los derechos y prerrogativas que ellos conceden son irrenunciables".

Conforme a lo expuesto, según el artículo 23 ejusdem, para que se presente una relación laboral se necesita la presencia de tres elementos, de forma obligatoria, para estar frente a un contrato de trabajo, a saber:

"ARTICULO 23. ELEMENTOS ESENCIALES. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurren estos tres elementos esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;

b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en

concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país; y

c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen."

Así mismo, de acuerdo al artículo 24 del mismo Estatuto, se presume que las relaciones personales de trabajo se encuentran regidas por un contrato de trabajo.

De las normas transcritas, se deduce que el elemento diferenciador entre la simple prestación de un servicio laboral y una relación laboral regida por un contrato individual de trabajo es la subordinación con la cual se presta el servicio personal, lo cual se traduce en una relación de dependencia entre el trabajador y el empleador, donde el primero se encontrará bajo las órdenes impartidas por el segundo y bajo las condiciones laborales designadas para la labor a desempeñar, bajo el marco de los principios y derechos laborales irrenunciables que deben cobijar toda relación laboral. Sobre este aspecto, la H. Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad del artículo 1º de la Ley 50 de 1990, reformatorio del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, indicó sobre la subordinación laboral lo siguiente:

"Subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador en el contrato de trabajo.

4. En toda prestación de servicios, como por ejemplo el mandato, la prestación de servicios profesionales y la relación laboral, existen dos elementos visibles: el servicio y su remuneración.

Por las características especiales de la relación laboral, la doctrina jurídica ha buscado establecer el elemento determinante, que permita distinguirla de las demás prestaciones de servicios y ha encontrado que es la subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador.

(...)

En este sentido, un autor de la doctrina laboral anota:

(...)

"Por lo demás, la subordinación del trabajo al empresario no es un dato que estemos en aptitud de aceptar o rechazar, sino que es un hecho real que se impone al investigador del régimen capitalista, del que constituye su esencia."²

Se observa así que la subordinación o dependencia del trabajador en el contrato de trabajo, de carácter jurídico, tiene hondas raíces económicas y políticas, y es inseparable del sistema de producción en los regímenes políticos de estirpe liberal.

El poder jurídico del empleador en relación con el trabajo como factor de la producción económica es un poder de disposición de la energía o fuerza de trabajo del trabajador, de acuerdo con los fines de la empresa. Lógicamente, dicho poder sólo es aplicable mientras exista la relación laboral y en las actividades directamente relacionadas con ella y se traduce de manera general en la dirección de las mismas, en la imposición de reglamentos y en el ejercicio del poder disciplinario.

Sobre el contenido del poder subordinante del empleador, el citado autor expresa:

² DE LA CUEVA, Mario. Derecho Mexicano del Trabajo. 4ª Ed. México, Editorial Porrúa, 1954, T. I, P. 495.

"(...)

"La obediencia del trabajador a las órdenes del patrono es la forma única de disposición de la energía de trabajo y es claro que el deber de obediencia constituye una relación personal, pues liga a la persona misma del trabajador, creando una relación de autoridad y, por tanto, de subordinación de la voluntad del obrero a la del patrono".³

(...) (...)

7. Esta corporación ha señalado que la relación de subordinación del trabajador es determinante de la relación laboral, que el poder subordinante del empleador comprende de modo general la dirección de las actividades de aquel, la imposición de reglamentos y la función disciplinaria y que el empleador está sujeto en su ejercicio a los límites constitucionales que imponen el respeto a la dignidad humana, a los derechos fundamentales que en ella se sustentan y a los principios mínimos fundamentales en materia laboral, así:

(...)

"(...) La subordinación a la que está sujeto el trabajador en el contrato de trabajo rige solamente para los efectos propios que se derivan de la relación laboral, es decir, para el cumplimiento de la actividad, servicio, o labor contratada y que, como se expresó, permite al empleador dar órdenes, dirigir al trabajador, imponerle reglamentos, o sancionarlo disciplinariamente (...)"⁴,⁵

En este orden de ideas, cuando dentro de una relación laboral se presentan la actividad personal del trabajador, la subordinación del trabajador respecto del empleador y un salario como contraprestación del trabajo realizado, indefectiblemente se está frente a un contrato de trabajo, siendo que a quien le corresponde la carga de la prueba será al trabajador que considere que tiene un contrato de trabajo respecto a un determinado empleador.

En igual sentido, la Corte Constitucional ha señalado que este principio aplica en aquellos casos donde las entidades del Estado, bajo la modalidad de un contrato de prestación de servicios, intentan ocultar una relación de trabajo, señalando que "en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud, por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales (así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios independiente)".

3.3.2. EL CONTRATO REALIDAD EN MATERIA DE SERVICIOS MÉDICOS.

Ha señalado el Consejo de Estado, que en el caso de quienes prestan servicios de salud es válida la suscripción de Contratos de Prestación de Servicios, en tanto sus servicios se ajustan al contenido del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en donde se prescribe la posibilidad de celebrar estos contratos con personas naturales cuando la actividad a contratar no puede ser realizada por el personal de planta de la entidad respectiva o cuando para tal efecto se requiere de conocimientos especializados, de tal manera que en atención a situaciones excepcionales que se requieren para la prestación del servicio

³ DE LA CUEVA, Mario. Ob. Cit., P. 496.

⁴ Sentencia C-299 de 1998, M. P. Carlos Gaviria Díaz, Aclaración de Voto de Hernando Herrera Vergara.

⁵ Corte Constitucional. Sentencia C-397 del veinticuatro (24) de mayo dos mil seis (2006). Magistrado Ponente Dr. Jaime Araujo Rentería.

⁶ Sentencia C-154 de 1997.

médico en sus diferentes disciplinas y a la autonomía e independencia inherente a la aplicación y ejercicio del mismo, se ha habilitado dicha modalidad para la contratación del personal en los servicios en salud⁷.

También refirió la Corporación en la providencia en cita, que si bien en muchos casos resulta legítima la figura del contrato estatal para satisfacer las diferentes necesidades del servicio público de salud, la especialidad de que se revisten los servicios de salud –tratándose de personas naturales–, no excluye por sí sola la posibilidad del empleo público y mucho menos la configuración en ciertos casos de una verdadera relación laboral con el Estado al extralimitar el contenido real y la naturaleza de un contrato de prestación de servicios, de manera que no puede admitirse de forma absoluta que en cuanto a tales servicios no quepa la figura del contrato realidad, desde luego, cuando a ello haya lugar, máxime si la prestación del servicio de salud constituye una función pública a cargo del Estado, inherente al objeto de las entidades estatales prestadoras del mismo⁸.

3.4. El material probatorio obrante en el proceso.

Sea lo primero manifestar que el Despacho dará pleno valor probatorio a los documentos allegados por la parte demandante y la entidad demandada, en tanto, su veracidad no fue cuestionada a lo largo del proceso por ninguno de los sujetos procesales a través de la tacha de falsedad⁹.

3.4.1. Con la demanda se aportó:

-Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Médico Zona Rural No. 0873 suscrito el 13 de octubre de 2010 entre la ESE CARMEN EMILIA OSPINA y FERNANDO SANCHEZ RIVERA, con el objeto de "EL CONTRATISTA se compromete para con EL CONTRATANTE a prestar sus servicios como Médico de Zona Rural a los usuarios de la E.S.E. "Carmen Emilia Ospina" con oportunidad, eficiencia y eficacia, de manera autónoma e independiente, de acuerdo con la programación establecida con el interventor del contrato"; por valor de \$15.840.000; el término de duración se fijó desde el 15 de octubre de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2010 (f. 36 a 39 c. 1).

-Adición No. 1 al Contrato de Prestación de Servicios No. 0873 suscrita el 28 de diciembre de 2010; se amplía el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de enero de 2011 (f. 40 y 41 c. 1).

-Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Médico No. 022 suscrito el 21 de enero de 2011 entre la ESE CARMEN EMILIA OSPINA y FERNANDO SANCHEZ RIVERA; por valor de \$21.542.400; el término de duración se fijó desde el 1 de febrero de 2011 hasta el 31 de mayo de 2011 (f. 42 a 45 c. 1).

-Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Médico No. 732 suscrito el 12 de mayo de 2011 entre la ESE CARMEN EMILIA OSPINA y FERNANDO SANCHEZ RIVERA; por valor de \$21.312.000; el término de duración se fijó desde el 1 de junio de 2011 hasta el 30 de septiembre de 2011 (f. 46 a 49 c. 1).

⁷ Sentencia del 1 de marzo de 2012. C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Rad. 25000-23-25-000-2008-00344-01(0681-11).

⁸ Ídem.

⁹ Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto de 2013. C.P. ENRIQUE GIL BOTERO. Rad. 05001-23-31-000-1996-00659-01.

-Adición No. 1 al Contrato de Prestación de Servicios No. 0732 suscrita el 30 de septiembre de 2011; adiciona la suma de \$10.565.000 y se amplía el plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de noviembre de 2011 (f. 50 y 51 c. 1).

-Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Médico No. 1517 suscrito el 25 de noviembre de 2011 entre la ESE CARMEN EMILIA OSPINA y FERNANDO SANCHEZ RIVERA; por valor de \$8.976.000; el término de duración se fijó desde el 1 de diciembre de 2011 hasta el 20 de enero de 2012 (f. 52 a 55 c. 1).

-Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Médico No. 407 suscrito el 31 de enero de 2012 entre la ESE CARMEN EMILIA OSPINA y FERNANDO SANCHEZ RIVERA; por valor de \$5.385.600; el término de duración se fijó del 1 al 29 de febrero de 2012 (f. 56 a 59 c. 1).

-Con escrito remitido por correo el 9 de enero de 2015 el señor FERNANDO SANCHEZ RIVERA solicitó a la ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva el reconocimiento de la relación laboral surgida entre este y la referida entidad desde el 17 de noviembre de 2010 hasta el 29 de noviembre de 2012, así como el consecuente reconocimiento y pago de los salarios pendientes y demás prestaciones sociales dejados de cancelar (f. 60 a 67 c. 1).

-Mediante oficio 01-TH-000485-S-2015 calendarado 4 de febrero de 2015, suscrito por el Gerente de la ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva, se negó la petición elevada por el señor SANCHEZ RIVERA, bajo el argumento que él no ostento ningún tipo de vinculación laboral con la ESE, ya que su vinculación fue mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios, regulado en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y en el Acuerdo 0013 de 2008 "Estatuto de Contratación de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina de Neiva" (f. 68 a 70 c. 1).

3.4.2. Con la contestación de la demanda se allegó:

-Acta de Liquidación correspondiente al Contrato de Prestación de Servicios No. 1517 de 2011, suscrita el 20 de enero de 2012 (f. 136 y 137 c. 1).

-Acta de Terminación correspondiente al Contrato de Prestación de Servicios No. 1517 de 2011 (f. 138 c. 1).

-Acta de Liquidación correspondiente al Contrato de Prestación de Servicios No. 407 de 2012, suscrita el 9 de marzo de 2012 (f. 139 y 140 c. 1).

-Acta de Terminación correspondiente al Contrato de Prestación de Servicios No. 407 de 2012 (f. 141 c. 1).

-Acta de Liquidación correspondiente al Contrato de Prestación de Servicios No. 732 de 2011, suscrita el 30 de noviembre de 2011 (f. 142 y 143 c. 1).

-Acta de Terminación correspondiente al Contrato de Prestación de Servicios No. 732 de 2011 (f. 144 c. 1).

-Acta de Liquidación correspondiente al Contrato de Prestación de Servicios No. 873 de 2010, suscrita el 3 de febrero de 2011 (f. 145 y 146 c. 1).

*Consejo Superior
de la Judicatura*

-Acta de Terminación correspondiente al Contrato de Prestación de Servicios No. 873 de 2010 (f. 147 c. 1).

- Del contrato No. 873 de 2010, lo siguiente:

- Lista de Chequeo Contrato de Prestación de Servicios Asistenciales (f. 351 c. 2).
- Acta de Liquidación (f. 352 y 353 c. 2).
- Acta de Terminación, calendada 31 de enero de 2011 (f. 354 c. 2).
- Certificado de Paz y Salvo (f. 355 c. 2).
- Calificación del Perfil Proveedores de Servicios (f. 356 y 398 c. 2).
- Certificado de Cumplimiento (f. 357 c. 2).
- Cuadro Cronograma de Actividades Desarrolladas, suscrito por el doctor FERNANDO SANCHEZ RIVERA, horas laboradas del 1 al 31 de enero de 2011, 240 horas en total (f. 358 a 360 c. 2).
- Acta de Iniciación, calendada 17 de noviembre de 2010 (f. 362 c. 2).
- Cuadro Cronograma de Actividades Desarrolladas DICIEMBRE 2010 (f. 364 c. 2).
- Adición No. 1 al Contrato de Prestación de Servicios No. 0873 de 2010 (f. 369 y 370 c. 2).
- Generalidades del Proceso de Contratación (f. 375 y 376 c. 2).
- Cuadro Cronograma de Actividades Desarrolladas, suscrito por el doctor FERNANDO SANCHEZ RIVERA, horas laboradas del 17 al 30 de noviembre de 2010, 140 horas en total (f. 380 y 381 c. 2).
- Contrato No. 0873 de 2010 (f. 393 a 396 c. 2).
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal (f. 423 c. 2).

- Del contrato No. 732 de 2011, lo siguiente:

- Lista de Chequeo Contrato de Prestación de Servicios Asistenciales (f. 260 c. 2).
- Acta de Liquidación (f. 261 y 262 c. 2).
- Acta de Terminación, calendada 30 de noviembre de 2011 (f. 263 c. 2).
- Certificado de Paz y Salvo (f. 264 c. 2).
- Calificación del Perfil Proveedores de Servicios (f. 265 c. 2).
- Cuadro Cronograma de Actividades Desarrolladas, suscrito por el doctor FERNANDO SANCHEZ RIVERA, horas laboradas del 1 al 30 de noviembre de 2011, 240 horas en total (f. 272 c. 2).
- Cuadro Cronograma de Actividades Desarrolladas en el mes de diciembre de 2011, suscrito por el doctor FERNANDO SANCHEZ RIVERA (f. 273 c. 2).
- Acta de Iniciación, calendada 1 de junio de 2011 (f. 274 c. 2).
- Cuadro Cronograma de Actividades Desarrolladas, suscrito por el doctor FERNANDO SANCHEZ RIVERA, horas laboradas del 1 al 31 de octubre de 2011, 240 horas en total (f. 278 c. 2).
- Certificado de Cumplimiento (f. 280 c. 2).
- Cuadro Cronograma de Actividades Desarrolladas, suscrito por el doctor FERNANDO SANCHEZ RIVERA, horas laboradas del 1 al 31 de octubre de 2011, 240 horas en total (f. 278 c. 2).
- Cuadros Cronograma de Actividades Desarrolladas AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE y NOVIEMBRE 2011, suscrito por el doctor FERNANDO SANCHEZ RIVERA (f. 279, 281, 282, 306 c. 2).
- Adición No. 01 al Contrato de Prestación de Servicios No. 0732 de 2011 (f. 290 y 291 c. 2).
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal (f. 295 c. 2).

- Cuadro Cronograma de Actividades Desarrolladas, suscrito por el doctor FERNANDO SANCHEZ RIVERA, horas laboradas del 1 al 31 de julio de 2011, 240 horas en total (f. 305 c. 2).
- Contrato No. 732 de 2011 (f. 316 a 319 c. 2).
- Generalidades del Proceso de Contratación (f. 342 a 345 c. 2).

- Del contrato No. 1517 de 2011, lo siguiente:

- Lista de Chequeo Contrato de Prestación de Servicios Asistenciales (f. 150 c. 1)
- Acta de Liquidación (f. 151 y 152 c. 1).
- Acta de Terminación, calendada 20 de enero de 2012 (f. 153 c. 1).
- Certificado de Paz y Salvo (f. 154 c. 1).
- Calificación del Perfil Proveedores de Servicios (f. 155 y 177 c. 1).
- Certificado de Cumplimiento (f. 156 c. 1)
- Cuadro Cronograma de Actividades Desarrolladas, suscrito por el doctor FERNANDO SANCHEZ RIVERA, horas laboradas del 1 al 20 de enero de 2012, 160 horas en total (f. 157 c. 1).
- Acta de Iniciación, calendada 2 de diciembre de 2011 (f. 159 c. 1).
- Cuadro Cronograma de Actividades Desarrolladas, suscrito por el doctor FERNANDO SANCHEZ RIVERA, horas laboradas del 1 al 31 de diciembre de 2011, 240 horas en total (f. 162 c. 1).
- Contrato No. 1517 de 2011 (f. 172 a 175 c. 1).
- Generalidades del Proceso de Contratación (f. 201 a 205 c. 2).
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal (f. 207 c. 2).

- Del contrato No. 407 de 2012, lo siguiente:

- Lista de Chequeo Contrato de Prestación de Servicios Asistenciales (f. 208 c. 2)
- Acta de Liquidación (f. 209 y 210 c. 2).
- Acta de Terminación, calendada 29 de febrero de 2012 (f. 211 c. 2).
- Certificado de Paz y Salvo (f. 212 c. 2).
- Calificación del Perfil Proveedores de Servicios (f. 213 y 231 c. 2).
- Formato de Supervisión de Contratos de Personal y Certificación de Pago (f. 214 c. 2).
- Acta de Iniciación, calendada 2 de febrero de 2012 (f. 217 c. 2).
- Contrato No. 407 de 2012 (f. 224 a 227 c. 2).
- Generalidades del Proceso de Contratación (f. 256 a 258 c. 2).
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal (f. 259 c. 2).

3.4.3. Durante el período probatorio se recaudó:

-Mediante oficio calendado 22 de mayo de 2017 la ESE Carmen Emilia Ospina informa que el personal médico de planta de esa entidad es nombrada mediante acto administrativo (Resolución) y no mediante contrato (f. 522 c. 3). En cumplimiento a lo solicitado por el Despacho allega copia auténtica de los siguientes documentos:

- Resolución No. 0264 del 2 de septiembre de 2014, mediante la cual se realiza el nombramiento en provisionalidad en el cargo de MEDICO GENERAL, CUATRO (4) HORAS, CODIGO 211 GRADO 17, con su correspondiente acta de posesión (f. 523 a 525 c. 3).

- Manual de Funciones y Competencias Laborales para el Nivel Profesional, Médico General, Código 211, Grado 17 (f. 526 y 527 c. 3).

-Interrogatorio de Parte del señor **FERNANDO SÁNCHEZ RIVERA**: quien manifestó tener estudios universitarios de profesión médico cirujano, actualmente labora en el Hospital del Municipio de Algeciras. Manifiesta que es cierto que él suscribió un contrato de prestación de servicios con la Carmen Emilia Ospina y fue destinado al puesto de salud de Vegalarga, inició labores el 17 de noviembre de 2010 y terminó el 29 de enero de 2012. Al preguntársele si es cierto que él suscribió en total cinco (5) contratos de prestación de servicios con dos (2) adiciones, y con cada contrato de prestación de servicios a la terminación del mismo se suscribía un acta de liquidación y terminación del contrato declarándose a paz y salvo con la entidad; manifestó que es cierto que suscribió contratos independientes. Señala que las actividades que desarrollaba eran consulta externa durante 9 horas, con un receso a las 12 del día para tomar los alimentos, reiniciar a la 1 de la tarde y terminar a las 5 de la tarde del mismo día, todos los días incluso sábados y domingos y disponibilidad a toda hora, él se encontraba solo y prácticamente hacía todo, urgencias, brigadas de salud en las diferentes veredas, todo lo que se pudiera presentar, remisiones a otros niveles, hospitalización, atendía partos. No existían más médicos, nunca le asignaron un ayudante u otro colega que lo pudiera reemplazar en cualquier momento. La apoderada actora pone de presente al testigo que en el centro de salud de Vegalarga para el año 2010 - 2012, no se encontraba habilitado para prestar servicios de urgencias, hospitalización o partes. Al preguntársele como hacía él para prestar dichos servicios sin contar con la habilitación. Contestó que hasta donde él sabe el I Nivel está habilitado para atender partos de emergencia de lo contrario se debe remitir a otro nivel pues pasó a manos de especialista, señala que no fueron muchos los partos que atendió, aproximadamente dos (2) o tres (3), a cualquier hora de la madrugada debía prestar sus servicios pues el único era él, debía atender al paciente, hacer la remisión y seguir trabajando. Explica que desarrollaba sus actividades y cada mes entregaba lo desarrollado en ese periodo; él no podía sustraerse a atender una urgencia o emergencia, era su deber atender lo que llegara, entonces estaba trabajando mucho más de nueve (9) horas. Manifiesta que no tenía un sistema de turnos, él mismo hacía sus turnos, tenía que arreglárselas solo pues no tenía nadie que le ayudara. Señala que las consultas todas las realizaba él, en el curso de la mañana, tarde o en la madrugada tenía que atender cualquier emergencia. Explica que él salía a descansar entre comillas pues en cualquier momento lo podían llamar y tenía que acudir como fuera. Manifiesta que prácticamente descansos no tuvo. Se decía que descansaba 10 días y aunque estaba en la casa, no se podía mover para ninguna parte porque en cualquier momento las auxiliares lo llamaban y él no podía escoger si acudir o no, más cuando en esa época era una zona conflictiva. Manifiesta que las brigadas se hacían de manera planificada, salían desde las siete (7) de la mañana, pero con la condición que ante cualquier emergencia la ambulancia debía llevarlo de regreso al hospital; se programaban nueve (9) horas continuas en la vereda y al regresar, si había gente represada debía atenderla y ampliar su horario de trabajo. En las brigadas se atendían de 50 a 60 consultas externas y en ocasiones se presentaban casos que requerían remisión a nivel de mayor complejidad. Al preguntársele si en el centro de salud de Vegalarga había algún funcionario de mayor jerarquía al cargo que él desempeñaba, que le impartiera órdenes o diciendo como ejecutar sus actividades contractuales. Manifestó que no existió

tal funcionario, no había a quien expresarle sus inquietudes, tenía que llamar a Neiva o venir hasta acá, a fin de mes cuando iba a pasar la cuenta de cobro él tenía que responderle a un jefe inmediato, el médico coordinador, en una oportunidad que reprogramó consultas y adelantó brigadas por un caso de fuerza mayor, le dijo que no podía tomarse esas atribuciones y le descontaron un dinero. Señala que los pobladores de Vegalarga sabían que él vivía allí y lo iban a buscar cuando lo necesitaban, a lo último había un enfermera y era ella quien lo llamaba. Manifiesta que desde un comienzo le dijeron que iba a tener un coordinador, a quien debía dar razón y reportar todo lo que estaba haciendo, la prueba fehaciente fue el descuento que le hicieron. En uno de los contratos se dice que cumplió a satisfacción pero está la prueba de lo que le pagaron, del descuento que le hicieron. Cuando él iba a pasar la cuenta de cobro debía sentarse y esperar a que el coordinador la revisara y la aprobara, le decía que tenía que hacer, él prácticamente dependía de dicho coordinador, quien mantenía comunicación con las muchachas, les preguntaba a qué hora llegaba a qué hora salía, cuánto duraba trabajando (Audiencia de pruebas del 28 de septiembre de 2017, f. 533 c. 3, CD min. 5:10 a 24:06).

3.5. Caso en concreto.

Ahora bien, descendiendo al caso en concreto, se procederá a determinar si existió entre las partes una verdadera relación laboral, por la configuración de sus elementos esenciales, a saber: la prestación personal del servicio, la subordinación y la remuneración.

Del material probatorio arrojado a las diligencias podemos constatar que el señor FERNANDO SANCHEZ RIVERA prestó sus servicios a la ESE CARMEN EMILIA OSPINA, desde el 17 de noviembre de 2010 hasta el 20 de enero de 2012 y del 2 al 29 de febrero de 2012, por medio de contratos de prestación de servicios, cumpliendo labores como Médico Consulta Externa de la referida entidad en el corregimiento de Vegalarga y veredas aledañas.

Concluido el anterior vínculo, obran en las diligencias diferentes contratos de prestación de servicios, suscritos directamente entre el señor FERNANDO SANCHEZ RIVERA y la ESE demandada, que datan de los siguientes periodos contractuales:

-Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Médico-Zona Rural No. 0873 (13 de octubre de 2010), del 15 de octubre de 2010 al 31 de diciembre de 2010 (f. 36 a 39 c. 1); cuya ejecución comenzó el 17 de noviembre de 2010, conforme el Acta de Iniciación (f. 362 c. 2):

-Adición No. 1 al Contrato de Prestación de Servicios No. 0873 en el cual se amplía el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de enero de 2011 (f. 40 y 41 c. 1).

-Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Médico No. 022 (21 de enero de 2011), del 1 de febrero de 2011 al 31 de mayo de 2011 (f. 42 a 45 c. 1).

-Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Médico No. 732 (12 de mayo de 2011), del 1 de junio de 2011 hasta el 30 de septiembre de 2011 (f. 46 a 49 c. 1).

-Adición No. 1 al Contrato de Prestación de Servicios No. 0732, en el cual se amplía el plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de noviembre de 2011 (f. 50 y 51 c. 1).

-Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Médico No. 1517 (25 de noviembre de 2011), del 1 de diciembre de 2011 hasta el 20 de enero de 2012 (f. 52 a 55 c. 1).

-Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Médico No. 407 (31 de enero de 2012), del 1 de febrero de 2012 al 29 de febrero de 2012 (f. 56 a 59 c. 1).

En los contratos de prestación de servicios suscritos por la ESE demandada y el hoy accionante, relacionados en precedencia, se encuentra consignado que el contratista debía cumplir, con las siguientes actividades: "1) Prestar sus servicios profesionales de conformidad con el objeto contractual, los manuales de procedimiento establecidos en la Institución y a lo reglamentado por la ley y la normatividad vigente para la prestación de los servicios de salud de primer nivel de complejidad y conforme a las necesidades del servicio; 2) Brindar atención médica a la población en general con su respectivo diagnóstico y tratamiento; 3) Ejercer acciones de referencia y contrarreferencia de acuerdo al sistema de remisión de pacientes; 4) Brindar el servicios de acuerdo al primer nivel de atención; 5) Realizar controles de los diferentes programas de salud de acuerdo con las normas existentes con el completo diligenciamiento de las historias clínicas; 6) Diligenciar los registros existentes y necesarios para la atención médica tales como historias clínicas, formatos de laboratorio, medicamentos, referencias RIPS, registros diarios y otros; 7) Identificar patologías que pertenezcan a programas de vigilancia epidemiológica en todas aquellas situaciones que sean facto de riesgo para la población; 8) Ejecutar programas educativos de promoción y prevención de la salud y saneamiento básico; 9) Realizar y coordinar los programas comunitarios establecidos en el área de influencia; 10)...; 13) Prestar disponibilidad para atención de consulta médica no programada; 14)...; 15) Las demás actividades anexas y complementarias propias de la Medicina, que se requieran para el cabal y adecuado cumplimiento de este objeto."

Así mismo, se aportaron los diferentes cuadros correspondiente al cronograma de actividades mensuales desarrolladas por el doctor FERNANDO SANCHEZ RIVERA, durante el tiempo de ejecución de los diferentes contratos.

De este modo se puede verificar las actividades desempeñadas por el señor FERNANDO SANCHEZ RIVERA para con la ESE CARMEN EMILIA OSPINA, en las que fungiera durante diferentes periodos como Médico General del área rural, en las instalaciones de la ESE, durante jornadas no inferiores a 8 horas diarias y el resto de tiempo en disponibilidad permanente, incluyendo los fines de semana y festivos, y cumplir con las funciones correspondientes de medicina general y preventiva cuando la Institución lo requiriese; siempre en beneficio del objeto social que por naturaleza desempeñan las empresas sociales del estado como lo es en este caso la ESE accionada.

Lo relacionado en precedencia coincide con lo afirmado bajo gravedad de juramento por el actor, quien sin dubitación alguna manifestó que cumplía actividades diarias de "consulta externa durante 9 horas, con un receso a las 12 del día para tomar los alimentos, reiniciar a la 1 de la tarde y terminar a las 5 de la tarde del mismo día, todos los días incluso sábados y domingos y disponibilidad a toda hora, él se encontraba solo y prácticamente hacia todo, urgencias, brigadas de salud en las diferentes veredas, todo lo que se pudiera presentar, remisiones a otros niveles, hospitalización, atendía partos."; que si bien no tenía un sistema de turnos, en cualquier momento lo podían llamar y no tenía la potestad de decidir si acudir o no, era su deber atender lo que llegara, entonces estaba trabajando mucho más de nueve (9) horas, pues se encontraba solo y para la época, la zona presentaba complicaciones de orden público, afirmó Audiencia de pruebas del 28 de septiembre de 2017, f. 533 c. 3, CD min. 5:10 a 24:06).

Adicionalmente, es claro que las funciones que el doctor SANCHEZ RIVERA cumplía en la institución no fueron de carácter transitorio o esporádico y por el

contrario, se trató de una labor que se desarrolló de manera ininterrumpida durante 1 año 2 meses y 3 días, lapso comprendido desde el 17 de noviembre de 2010 hasta el 20 de enero de 2012 (iniciación del contrato No. 0873 de 2010 hasta la terminación del contrato No. 1517 de 2011); y 27 días más, desde el 2 de febrero de 2012 hasta el 29 de febrero de la misma anualidad (iniciación y terminación del contrato No. 407 de 2012).

Lo anterior, permite corroborar la prestación personal del servicio.

Con respecto a la subordinación, fueron arrimadas a las diligencias unos cuadros de cronogramas de actividades, en los que puede observarse que el actor estaba sometido a un horario mínimo de 8 horas diarias, que constituían verdaderas jornadas de trabajo.

En el caso concreto, si bien el demandante manifiesta que en el centro de salud de Vegalarga no había ningún funcionario de mayor jerarquía al cargo que él desempeñaba, que le impartiera órdenes o le dijera cómo ejecutar sus actividades; en forma conteste señala que él tenía que responderle al doctor "Faiver", quien era el médico coordinador, a quien debía dar razón y reportar todo lo que estaba haciendo; era quien revisaba y aprobaba las cuentas de cobro, le decía qué tenía que hacer y mantenía comunicación con las auxiliares a quienes les preguntaba la hora de llegada y salida del señor SANCHEZ RIVERA.

Advierte el Despacho que varios de los documentos que hacen parte del expediente administrativo, tales como los contratos, pactos de iniciación, terminación, liquidación, calificación del perfil de proveedores de servicios y certificados de cumplimiento, entre otros, correspondientes a los contratos No. 732 de 2011, 1517 de 2011 y 407 de 2012, son suscritos por FAIVER AUGUSTO SEGURA OCHOA, en calidad de Supervisor o Interventor, lo cual coincide con lo afirmado por el demandante.

Así las cosas, como lo precisa el interrogado y los contratos de prestación de servicios así lo corroboran, al actor no sólo le era ineludible permanecer un mínimo de ocho (8) horas diarias prestando el servicio de consulta externa a los usuarios, sino que el resto de tiempo debía contar con disponibilidad permanente, incluyendo fines de semana, para atender cualquier eventualidad que se presentara en el centro de salud del corregimiento de Vegalarga, según reza en las cláusulas contractuales pactadas en la mayoría de los contratos.

Además, debía cumplir con otra serie de labores, que de igual manera son desempeñadas por el personal de planta, tal y como se puede constatar al comparar el manual de funciones y competencia laborales para el cargo de Médico General, aportado por la entidad accionada, obrante a folio 526 y 527 c. 3.

Por lo anterior, podemos concluir que las actividades desplegadas por el actor, se encontraban sometidas a las orientaciones dadas por la institución bajo su propia directiva, más aún si tenemos presente que el horario es en principio una actividad meramente administrativa, a la que se liga la subordinación y dependencia.

Circunstancia que demuestra que el demandante no podía ejercer sus actividades como Médico General, de forma autónoma e independiente y en el horario que él dispusiera, sino que tenía que hacerlo bajo las órdenes y directrices impartidas por la entidad.

Ahora bien, aunque el propio demandante en el interrogatorio de parte practicado en el proceso, manifestó que durante la permanencia en el centro de salud nadie le impartía órdenes o le decía cómo ejecutar sus actividades, considera el Despacho que con ello se refería a la garantía de que dados sus conocimientos podía emitir con toda libertad su opinión profesional con respecto a la atención y tratamiento de sus pacientes, incluso, tratándose de urgencias y en algunos partos, aunque se tratara de I Nivel, aspecto que en dada desvirtúa la existencia de un contrato realidad.

Al respecto, el Consejo de Estado ha expuesto:

*"Debe precisar la Sala además, que la autonomía e independencia que ostenta el personal médico para aplicar sus conocimientos científicos específicamente a cada caso, no descarta la existencia de una relación de subordinación y dependencia, en tanto dicho elemento puede configurarse en otros aspectos de índole administrativo, como el cumplimiento de horario, la recepción de órdenes en los diversos aspectos que componen la prestación del servicio, el cumplimiento de las labores bajo las mismas condiciones de los demás empleados de planta etc., lo que a su vez supone que tratándose de un verdadero contrato de prestación de servicios, la autonomía e independencia deba abarcar aun los aspectos anteriormente referidos."*¹⁰

Teniendo en cuenta que los ya relacionados contratos de prestación de servicio suscritos, tuvieron lugar de forma continua, salvo el contrato No. 407 de 2012, el cumplimiento de funciones propias de la entidad de salud, el horario que debía cumplir el demandante y la subordinación al Coordinador Médico, se desdibuja la naturaleza, temporalidad y transitoriedad propia del contrato de prestación de servicio y queda demostrada hasta aquí la vinculación permanente del actor.

Ahora bien, la contraprestación también se encuentra demostrada como quiera que por la labor personal que realizaba en la ESE Carmen Emilia Ospina el doctor FERNANDO SANCHEZ RIVERA percibía una remuneración estipulada en cada uno de los contratos que suscribió por la entidad, allegados al plenario.

Bajo las anteriores precisiones, se ha concretado el tratamiento jurisprudencial de los contratos realidad, de donde se configura como requisito indispensable para demostrar la existencia de una relación de trabajo, que el demandante acredite en forma incontrovertible los tres (3) elementos de la relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, situación que se demuestra con la continuidad en el tiempo de los contratos de prestación de servicios entre el señor FERNANDO SANCHEZ RIVERA y la ESE CARMEN EMILIA OSPINA, así como la remuneración respectiva y la existencia de subordinación.

¹⁰ CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION SEGUNDA. Sentencia del 10 de febrero de 2011. Consejero ponente: GUSTAVO EDUARDO GOMEZ ARANGUREN. Radicación número: 73001-23-31-000-2008-00081-01(1618-09)

Se configura así la existencia de un contrato realidad en aplicación de los principios consagrados en los artículos 13 y 53 de la Constitución Política, como quiera que el demandante prestó un servicio en la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina de manera subordinada y en las mismas condiciones que los demás empleados públicos.

Así las cosas, se declarará la nulidad del acto administrativo acusado, es decir el Oficio No. 01-TH-00485-S-2015 de fecha 4 de febrero de 2015; en su lugar, declarará la existencia de una relación laboral entre el señor FERNANDO SANCHEZ RIVERA y la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA, por los periodos comprendidos del 17 de noviembre de 2010 al 20 de enero de 2012 y del 2 de febrero de 2012 al 29 de febrero de 2012; y a título de restablecimiento del derecho se condenará a la mencionada E.S.E. a cancelar a favor del señor SANCHEZ RIVERA, el valor de las prestaciones surgidas en la prestación del servicio y, el correspondiente cómputo del tiempo laborado para efectos pensionales ~~lo que conlleva al pago de las cotizaciones legales~~ tomando como base el valor de lo pactado en los contratos, de conformidad con lo establecido por el Consejo de Estado¹¹.

Ahora bien, el salario que deberá tener en cuenta la entidad como base para liquidar las prestaciones, será el que devengaba un Médico General de planta de la entidad, o el valor de lo pactado en los contratos de prestación de servicios, si aquél es inferior.

Respecto a las prestaciones sociales a cargo de los sistemas de salud y pensiones, la indemnización no puede ser por la totalidad de dichos montos, sino la cuota parte que la entidad demandada dejó de trasladar a las entidades de seguridad social a las cuales cotizaba el contratista durante el tiempo de la relación, conforme lo ha estipulado la jurisprudencia del Consejo de Estado¹².

En virtud de lo anterior se ordenará a la ESE Carmen Emilia Ospina el pago a favor del actor de los porcentajes de cotización que le correspondían de conformidad con la ley 100 de 1993, ~~ya que éstos fueron~~ asumidos en su totalidad por el contratista¹³. Sin embargo, si dichos pagos no se han realizado por parte del demandante, la entidad ~~debe efectuar~~ las cotizaciones respectivas, descontando de las sumas que se adeudan al actor el porcentaje que a ésta corresponda.

El Despacho considera inocuo ordenar que se realice el pago al sistema de seguridad social en salud, toda vez que el accionante no usará los servicios de salud pues las cotizaciones corresponderían a los periodos reconocidos como constituyentes de una relación laboral, es decir del 17 de junio de 2010 al 20 de enero de 2012 y del 2 de febrero de 2012 al 29 de febrero de 2012.

No se reconocerá el valor del recargo nocturno, horas extras, compensatorios, dominicales y festivos toda vez no se demostró la cantidad de horas trabajadas bajo estas condiciones durante la existencia del vínculo laboral, que permita

¹¹ Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 19 de febrero de 2009. Rad. 3074-05. C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.

¹² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 16 de febrero de 2012, C.P. Gerardo Arenas Monsalve. Rad. 41001-23-31-000-2001-00050-01(1187-11)

¹³ Ver constancias folios 318 y 319 c. 2

establecer con certeza y total claridad la condena de la entidad por este concepto.

En cuanto a los Riesgos Laborales el Decreto Ley 1295 de 1994, establece que dicha obligación está a cargo del empleador (artículo 21 del Decreto Ley 1295 de 1994), sin embargo, como en el presente asunto el contratista, que fungió como empleado, no probó que hubiese sufragado este seguro que cubre los siniestros derivados de accidentes de trabajo para cada uno de los contratos, no habrá lugar a reconocimiento alguno por este concepto.

Ahora bien, sobre las sumas causadas, debe precisarse que no opera la indemnización moratoria o sanción moratoria (de cesantías y demás prestaciones), por tratarse ésta de una sentencia de carácter constitutivo, a partir de la cual nace el derecho a favor del actor, pues la morosidad empieza a contarse a partir de la ejecutoria de esta sentencia.

Finalmente, respecto a la devolución de los dineros sufragados por pólizas de cumplimiento y retención en la fuente, basta con decir, que si bien en cada uno de los contratos se estipuló la constitución de pólizas a cargo del contratista y en efecto, las mismas militan dentro del proceso (Contrato 1517, f. 170 C. 1, contrato 407 f. 220 c. 2, contrato 732, f. 314 c. 2 y su adición f. 287 c.2, contrato 873 f. 384, c. 2 y su adición 368), la declaración de la existencia de la relación laboral no implica *per se* la devolución de sumas de dinero que se generaron en virtud de la celebración contractual, pues la finalidad del restablecimiento del derecho es el reconocimiento de emolumentos salariales y prestaciones dejados de percibir con la relación laboral oculta más no la devolución de sumas pagadas con ocasión de la celebración del contrato¹⁴.

De acuerdo a lo anterior, las sumas que resulten serán ajustadas de conformidad con el artículo 187 del CPACA y con la siguiente fórmula:

$$R = Rh \frac{\text{índice final}}{\text{índice inicial}}$$

El valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es el que corresponde a la prestación social, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia) por el índice inicial (vigente en la fecha en que debió efectuarse el pago). Los intereses serán reconocidos en la forma señalada en el artículo 192 del CPACA. Por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se aplicará separadamente, mes por mes.

PRESCRIPCIÓN. En el caso *sub examine* está claro que el último periodo de prestación de servicios del actor fue en el año 2012, y que la reclamación administrativa fue presentada concretamente el 09/01/2015¹⁵, no se puede declarar la prescripción extintiva, pues el demandante tenía un plazo de hasta tres (3) años, contado entre la terminación del último contrato de prestación de servicios y la reclamación elevada ante la entidad demandada, la cual tuvo ocurrencia como se indicó dentro de dicho término.

Finalmente, en virtud de lo dispuesto por el artículo 188 del CPACA, se condenará en costas y gastos del proceso a la entidad demandada por ser la

¹⁴ Sentencia del 13 de mayo de 2015, C.P. SANDRA LISSET IBARRA VELEZ, Rad. 68001-23-31-000-2009-00636-01(1230-14).

¹⁵ Recibo servicios postales f. 66 c. 1

594

parte vencida; de tal manera que, se determinarán en la suma de - Ochocientos mil pesos- \$800.000 M/C.

Por lo expuesto el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la entidad demandada.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio No. 01-TH-00485-S-2015 de fecha 4 de febrero de 2015, por medio del cual se negó la existencia de la relación laboral, el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales al señor FERNANDO SANCHEZ RIVERA. En consecuencia, **se declara** que entre el actora y el ente demandado se presentó una relación laboral durante los periodos comprendidos del 17 de noviembre de 2010 al 20 de enero de 2012 y del 2 de febrero de 2012 al 29 de febrero de 2012.

TERCERO: CONDENAR a la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA, a título de restablecimiento del derecho, a reconocer y pagar a favor del señor FERNANDO SANCHEZ RIVERA, las prestaciones sociales, tomando como base para liquidarlas, el salario que devengaba un Médico General de planta de la entidad, o el valor de lo pactado en los contratos de prestación de servicios, si aquél es inferior, correspondientes a los periodos en los cuales se demostró la existencia de la relación laboral, es decir, del 17 de noviembre de 2010 al 20 de enero de 2012 y del 2 de febrero de 2012 al 29 de febrero de 2012.

CUARTO: CONDENAR a la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA a reconocer y pagar a favor del señor FERNANDO SANCHEZ RIVERA los porcentajes de cotización correspondientes a salud y pensión que debió trasladar a las entidades de seguridad social durante el periodo en que prestó sus servicios. Sin embargo, si dichos pagos no se han realizado por parte del demandante, la entidad debe efectuar las cotizaciones respectivas, descontando de las sumas que se adeudan al actor el porcentaje que a éste corresponda, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

Las sumas serán ajustadas conforme se señaló en la parte considerativa de la presente decisión, aplicando la fórmula allí indicada.

QUINTO: Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011, en cuanto se den los presupuestos allí indicados.

SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

SÉPTIMO: CONDENAR, en costas a la entidad demandada por la suma de OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 800.000), conforme lo expuesto.

OCTAVO: DISPONER la devolución del remanente de los gastos del proceso, si los hubiere, una vez liquidados por secretaría.

NOVENO: En firme la presente sentencia archívese el expediente, una vez realizadas las correspondientes anotaciones en el software de gestión.

Notifíquese y Cúmplase,


NELCY VARGAS TOVAR
JUEZ

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

MAGISTRADA PONENTE DRA. BEATRIZ TERESA GALVIS BUSTOS

Neiva, Primero (1º) de noviembre de dos mil diecinueve (2019)

Ref. Expediente	:	41 001 33 33 002-2015-00335-02
Demandante	:	FERNANDO SÁNCHEZ RIVERA
Demandado	:	ESE CARMEN EMILIA OSPINA
Asunto	:	CONTRATO REALIDAD – MEDICO
Acta	:	67

**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA**

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la Entidad demandada contra la sentencia dictada el 20 de octubre de 2017 dentro del proceso de la referencia, por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El señor Fernando Sánchez Rivera, por conducto de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

consagrado en el artículo del 138 CPACA, presentó demanda contra la ESE Carmen Emilia Ospina, con el fin que se acceda a las siguientes pretensiones¹:

"PRIMERA.- Que se declare la nulidad del oficio No. **01-TH-000485-S-2015** de fecha 04 de Febrero de 2015, dimanado de la **ESE CARMEN EMILIA OSPINA**, por la cual se negó el reconocimiento de la existencia de un contrato realidad suscrito entre mi poderdante y la **ESE CARMEN EMILIA OSPINA** y por consiguiente se negó el reconocimiento, liquidación y pago de todos los emolumentos laborales frutos de esa relación laboral que existió.

SEGUNDA.- Que como consecuencia de la declaración anterior y a manera de restablecimiento del derecho, se condene a **LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA** al reconocimiento de la existencia de un contrato realidad suscrito entre mi poderdante y la **ESE CARMEN EMILIA OSPINA** y por consiguiente el reconocimiento, liquidación y pago de todos los emolumentos laborales frutos de esa relación laboral que existió, dichos pagos se deberán hacer de acuerdo a lo establecido en el **CPACA**, por lo cual se ordenará el pago de la retroactividad o valores dejados de percibir por los conceptos anteriormente expuestos.

QUE COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE LAS PRETENSIONES PRIMERA Y SEGUNDA SE ESTABLEZCA:

TERCERA.- Que se declare que entre mi poderdante y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA se dio un contrato realidad cuyos extremos temporales fueron del 17 de noviembre de 2010 hasta el 29 de febrero de 2012 desempeñando el cargo de médico en las Instalaciones de la ESE CARMEN EMILIA OSPINA.

CUARTA.- Declarar que los continuos y sucesivos contratos de prestación de servicios celebrados entre mi prohijado y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA se dio un contrato realidad cuyos extremos temporales fueron del 17 de Noviembre de 2010 hasta el 29 de febrero de 2012, realmente corresponden a una relación laboral como servidor público, es decir, beneficiarios de todos los derechos salariales, prestaciones sociales y demás emolumentos que se reclamen en este escrito.

QUINTA.- Que conforme a las anteriores Declaraciones, se sirvan CONDENAR a favor de mi poderdante y teniendo en cuenta que al momento de la presentación de la correspondiente DEMANDA la ESE CARMEN EMILIA OSPINA no ha cancelado las acreencias y obligaciones laborales a mi poderdante, en los siguientes emolumentos así:

• **POR CONCEPTO DE CESANTÍAS**, por todo el tiempo laborado, es decir, del 17 de noviembre de 2010 hasta el 29 de febrero de 2012, con su correspondiente sanción moratoria.

¹ Folios 23 a 29.

- *POR CONCEPTO DE INTERESES DE LAS CESANTÍAS, por todo el tiempo laborado, es decir del 17 de noviembre de 2010 hasta el 29 de febrero de 2012 de 2012.*

- *POR CONCEPTO DE PRIMAS DE SERVICIOS, por todo el tiempo laborado, es decir del 17 de noviembre de 2010 hasta el 29 de febrero de 2012.*

Sobre este punto resulta relevante resaltar que se tendrán que cancelar todas y cada una de las primas a que tengo derecho como servidor público, esto es, primas de vacaciones, prima de mitad de año, prima navideña, prima por ostentar la calidad de servidor público así como todas las demás a las que tiene derecho mi representado.

- *POR CONCEPTO DE AUXILIO DE ALIMENTACIÓN Y DE TRANSPORTE, por todo el tiempo laborado, es decir del 17 de noviembre de 2010 hasta el 29 de febrero de 2012.*

- *POR CONCEPTO DE LAS CORRESPONDIENTES DOTACIONES A QUE TUVIERA DERECHO, por todo el tiempo laboral, esto es del 17 de Noviembre de 2010 hasta el 29 de febrero de 2012*

- *EL PAGO DE LAS COTIZACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES, AHORA RIESGOS LABORALES Y TODOS LOS DEMÁS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, a que tengo derecho por cuanto me vi inmerso en la necesidad de cancelar el mismo los aludidos pagos cuando era obligación de la entidad a la que se dirige el presente escrito la encargado de ello.*

- *AL REINTEGRO DE LOS PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL CANCELADOS POR MI REPRESENTADO.*

- *LA DEVOLUCIÓN DE TODO CONCEPTO DESCONTADO A MI PODERDANTE POR HABER SUSCRITO CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TALES COMO LA RETENCIÓN EN LA FUENTE, LA LEGALIZACIÓN ASÍ COMO LAS PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO QUE SE CANCELARON.*

- *POR CONCEPTO DE VACACIONES Y PRIMAS DE SERVICIOS A QUE TENGA DERECHO POR OSTENTAR LA CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO DE UNA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, durante el tiempo de duración del vínculo laboral, esto es del 17 de Noviembre de 2010 hasta el 29 de febrero de 2012*

CUARTO.- *Que se CONDENE al pago de la **SANCIÓN MORATORIA** favor de mi poderdante por el no pago de las prestaciones sociales y salarios e indemnizaciones.*

QUINTO.- *Que todos los valores que se reconozcan deben ser cancelados debidamente indexados respecto de las sumas adeudadas conforme lo establece el I.P.C. que para tales efectos expida el DANE."*

1.2. Hechos²:

La anterior solicitud se sustenta en los siguientes supuestos fácticos:

1.2.1. El demandante fue vinculado a la ESE Carmen Emilia Ospina desde el 17 de noviembre de 2010 hasta el 29 de febrero de 2012, mediante contratos de prestación de servicios profesionales, en los cuales el objeto contractual era prestar servicios de salud de primer nivel de complejidad y conforme a las necesidades del servicio.

1.2.2 La prestación del servicio fue de forma permanente y continuada por el término de 2 años y 4 meses.

1.2.3. Al término de la vinculación contractual, la entidad demandada no canceló ningún valor por prestaciones sociales al demandante.

1.2.4. El demandante solicitó ante la entidad demandada el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales que consideró se dejaron de cancelar por la prestación personal del servicio, solicitud que fue negada a través del Oficio No. 01-TH-000485-S-2015 del 4 de febrero de 2015

1.3. Fundamentos de Derecho³

La parte actora invocó como normas violadas los artículos 1, 2, 6, 53 de la Constitución Política y 2, 82, 86, 136, 171, 176, 177 y 178 de la Ley 1437 de 2011.

El apoderado de la parte actora transcribió el contenido de la sentencia proferida por la Subsección "A" de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 4 de marzo de 2010 en el radicado 2003-00015, en la cual se explicaron los elementos de una relación laboral y los efectos de los mismos sobre los contratos de prestación de servicios.

² Folios 2 a 6
³ Folios 9 a 24 y 95 a 100

Indicó que Corte Constitucional ha manifestado en diversas oportunidades que si se demuestra la existencia de una relación laboral que implica una actividad personal subordinada y dependiente, el contrato se torna en laboral en razón a la función desarrollada, lo que da lugar al reconocimiento y pago de Prestaciones Sociales a cargo de la entidad contratante.

Manifestó que, *"tratándose de la profesión de la medicina, como es el caso que nos ocupa, no es algo que se pueda mirar como un servicio temporal, es un servicio permanente y desde cualquier punto de vista riñe con la naturaleza misma del cargo al que se quiera vincular a una persona mediante contrato de prestación de servicios profesionales, cualquiera que sea la denominación que se adopte."*

Adujo que los médicos contratados por prestación de servicios cumplen con las mismas funciones que los de planta, por tal razón los primeros se encuentran en una situación más desfavorable.

Señaló que *"en este caso en concreto estamos en presencia de UNA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, donde de manera indiscutible TODAS LAS PERSONAS QUE LABORAN ALLÍ, SEA EL CARGO QUE SEA deben ser vinculados como si fueran verdaderos servidores públicos"*, por lo que queda proscrita la vinculación a través de contratos de prestación de servicios profesionales.

Agregó que el acto administrativo demandado desconoció las normas en que debía fundarse, toda vez que el artículo 195 de la Ley 100 de 1993, indica que todas las personas vinculadas a las E.S.É tendrán el carácter de empleados públicos o de trabajadores oficiales, por lo tanto, también adolece de falsa motivación.

II. TRÁMITE PROCESAL

2.1. Radicación, admisión y notificación de la demanda

La demanda fue radicada el 22 de junio de 2015, correspondiéndole por reparto al Juzgado Segundo Administrativo de Neiva (fl. 89, C. principal), el cual la

inadmitió por auto de 2 de julio de 2015 (fl. 92), al considerar que no el poder no cumplía con los parámetros del artículo 76 del CGP, no estaban descritas las causales de nulidad del acto administrativo demandado y falta el acápite de cuantía.

Una vez subsanados los anteriores yerros (fls. 94 a 106), por auto del 23 de julio de 2015 se admitió la demanda ordenando notificar de la misma a la entidad demandada.

El 20 de agosto de 2015, se llevó a cabo la notificación personal a la dirección electrónica de E.S.E Carmen Emilia Ospina, del Ministerio Público y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como se hizo constar a folios 114 a 117.

2.2.- Contestación de la demanda

La E.S.E Carmen Emilia Ospina mediante escrito del 30 de octubre de 2015⁴ contestó la demanda refiriéndose a los hechos y oponiéndose a las pretensiones de la demandada, por considerar que entre la Entidad y el actor se suscribieron contratos de prestación de servicios, los cuales no fueron continuos, ni estuvo el contratista bajo la dependencia y subordinación de los funcionarios del Hospital, al contrario, su labor se realizó de manera independiente y autónoma.

Indicó que dentro de la ejecución de los contratos no se presentaron los tres elementos de una relación laboral, ya que el demandante siempre actuó con autonomía y liberalidad del contratista, además nunca percibió un salario, pues lo que percibía se imputaba a honorarios del rubro de gastos por servicios prestados y no del gasto del personal de planta de la Entidad.

Manifestó que el médico requiere de conocimientos especiales y técnicos, lo que hace viable su vinculación mediante contratos de prestación de servicios profesionales.

⁴ Fls. 119 a 135

Sostuvo que la ley prevé dos clases de servidores públicos, los "*empleados públicos y los trabajadores oficiales*", los primeros con una vinculación legal y reglamentaria y los últimos con suscripción de un contrato individual de trabajo, sin que se dé la posibilidad que un contratista adquiera dichas calidades.

Afirmó que la Corte Suprema de Justicia en la Sala Laboral, ha indicado que a los servidores públicos no le es aplicable el contenido del artículo 24 del CST, el cual presume que toda vinculación se realiza a través de un contrato de trabajo.

Señaló que el actor transgrede los principios rectores de la actividad contractual, la autonomía de la voluntad y la buena fe, como quiera que desde el primer contrato de prestación de servicios las partes eran conscientes de sus obligaciones y los términos de los actos suscritos.

Adujo que el demandante celebró y prestó sus servicios con la E.S.E, a través de contratos de prestación de servicios profesionales ejerciendo una profesión liberal como es la de la medicina, con total autonomía e independencia, por lo que no se configuraron los elementos que conforman el contrato de trabajo.

Mencionó que teniendo en cuenta el grado de autonomía e independencia del contrato de prestación de servicios y la naturaleza de las funciones desarrolladas por el demandante, no es posible admitir la configuración de una relación laboral.

Manifestó que el Consejo de Estado ha señalado que el hecho de que un contratista cumpla horario o reciba instrucciones no implica la configuración de la subordinación como elemento esencial de las relaciones laborales.

Indicó que en la presente relación pueden existir los elementos de la remuneración y de la prestación personal del servicio, pero no el de subordinación, ya que los turnos prestados por él son de resorte del mismo contratista, y solo se cancelan las horas en las cuales desarrolla la actividad contratada.

Aludió que la medicina al ser una profesión de carácter liberal, tiene una característica muy particular respecto a la remuneración, toda vez que quien ejerce esta actividad no percibe salario, sino honorarios.

Por último, solicitó que sobre cualquier derecho reconocido se aplique la prescripción.

2.3.- Audiencia inicial

A través de providencia de 25 de agosto de 2016 (fl. 458), el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva dispuso fijar como fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, el día 8 de febrero de 2017 a las 10:00 a.m.

A folios 483 a 484, obra el Acta de la audiencia inicial, en la cual se hizo constar que la entidad demandada no propuso excepciones previas que deban ser resueltas en dicha audiencia y que la excepción de prescripción se estudiaría con el fondo del asunto, tampoco se observó alguna de oficio por decretar, por lo tanto, se procedió a continuar con el trámite de la audiencia.

Acto seguido, se procedió a fijar el litigio a partir de los presupuestos fácticos de la demanda y la contestación, delimitando el problema jurídico en los siguientes términos:

"determinar si el demandante prestó sus servicios a la E.S.E Carmen Emilia Ospina como médico, reuniendo los elementos esenciales de una relación laboral, como subordinación, prestación personal y la remuneración y, en consecuencia, se debe declarar la nulidad de la actuación administrativa mediante la cual se niega la existencia de una relación laboral"

Posteriormente, se dispuso tener como pruebas los documentos allegados con la demanda y su contestación, se decretó la prueba solicitada a folio 32 de la demandada, esto es, copia de *"cualquier contrato de un médico de planta de dicha entidad"* y el interrogatorio de parte solicitado por la Entidad demandada y se negaron las demás solicitadas.

Luego, se fijó el día 28 de septiembre de 2017 a las 8:30 para realizar la práctica de pruebas.

2.4 Audiencia de pruebas

En el día y hora fijados, se realizó la audiencia de pruebas (fls. 532 y 533), en donde fue oído en interrogatorio de parte el señor Fernando Sánchez Rivera y se incorporó la documental requerida.

En firme la anterior decisión, el Juzgado, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 182 del C.P.A.C.A., decidió correr traslado a las partes, por el término de 10 días, para que presentaran sus alegatos finales.

2.4.- Alegatos de conclusión de primera instancia

2.4.1. El apoderado de la *parte actora* mediante escrito del 28 de septiembre de 2017 (fls. 535 a 555 y 571 a 573) transcribió el contenido de las sentencias C-171 de 2012 y C-614 de 2009, las cuales abordaron el tema de la vinculación de los servidores públicos a las Empresas Sociales del Estado, para concluir que independientemente del nombre que las partes asigne al contrato lo realmente vinculante es el contenido, del cual se puede desprender una verdadera relación laboral.

Manifestó que el señor Fernando Sánchez Rivera suscribió varios contratos con la entidad demandada, en los cuales desempeño la misma labor y tenía un jefe al cual se le debían rendir informes periódicos.

Indicó que la E.S.E Carmen Emilia Ospina prestó los elementos quirúrgicos para el desarrollo del objeto contractual y que además cumplía con un horario laboral, laborando horas extras, igual que los funcionarios de planta de la entidad, por lo tanto, se demostró la subordinación y dependencia propia de los contratos laborales.

2.4.2. La apoderada de *Entidad demandada* presentó alegatos de conclusión mediante escrito del 12 de octubre de 2017 (fls. 574 a 582), manifestando que no es posible acceder a la pretensión de declarar que el demandante es un servidor público ya que su vinculación no reúne las características propias de dicho empleo.

Respecto a la declaración del contrato realidad indicó que la parte actora no probó la configuración de los elementos de una relación laboral, toda vez que el actor no estaba sometido a horario, ya que él era quien agendaba las citas de acuerdo la disponibilidad de tiempo con la que contara.

Manifestó que, en el interrogatorio de parte, el demandante afirmó que era el único médico del corregimiento de "Vegalarga", sin tener un jefe inmediato en dicho lugar, por lo que concluye que no estaba subordinado ni sometido a constantes órdenes.

Indicó que la afirmación de que el "Jefe inmediato" le descontó el pago de unas horas, dicha circunstancia no es un presupuesto para que se alegue y configure la subordinación, además que no precisó quien ejercía dicha labor.

Señaló que el actor falta a la verdad cuando afirmó que debía estar disponibles las 24 horas del día en el centro de Salud de Fortalecillas para atender partos, urgencias y hospitalización toda vez que en dicho centro de salud no se prestan esa clase de servicios, pues solo está creada para atender circunstancias ambulatorias y consulta externa.

Adujo que se probó que el actor prestaba el servicio de salud de manera libre, pues de su declaración se desprende que estaba 24 horas disponible porque lo conocían, más no porque así lo haya ordenado un superior.

Reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso en concreto.

2.4.3. El Agente del *Ministerio Público* no conceptuó.

2.5.- Sentencia de primera instancia

El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Neiva, profirió sentencia de primera instancia el 20 de octubre de 2017⁵, en cuya parte resolutive, dispuso lo siguiente:

PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la entidad demandada.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio No. 01-TH-00485-S-2015 de fecha 4 de febrero de 2015, por medio del cual se negó la existencia de la relación laboral, el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales al señor FERNANDO SÁNCHEZ RIVERA. En Consecuencia, se declara que entre el actora (sic) y el ente demandado se presentó una relación laboral durante los periodos comprendidos entre el 17 de noviembre de 2010 al 20 de enero de 2012 y del 2 de febrero de 2012 al 29 de febrero de 2012.

TERCERO: CONDENAR a la E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA, a título de restablecimiento del derecho, a reconocer y pagar a favor del señor FERNANDO SÁNCHEZ RIVERA, las prestaciones sociales, tomando como base para liquidarlas, el salario que devengaba un Médico General de planta de la entidad, o el valor de lo pactado en los contratos de prestación de servicios, si aquel es inferior, correspondientes a los periodos en los cuales se demostró la existencia de la relación laboral, es decir, del 17 de noviembre de 2010 al 20 de enero de 2012 y del 2 de febrero de 2012 al 29 de febrero de 2012.

CUARTO: CONDENAR a la E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA a reconocer y pagar a favor del señor FERNANDO SÁNCHEZ RIVERA los porcentajes de cotización correspondientes a salud y pensión que debió trasladar a las entidades de seguridad social durante el periodo que prestó sus servicios. Sin embargo, si dichos pagos no se han realizado por parte del demandante, la la entidad debe efectuar las cotizaciones respectivas, descontando de las sumas que se adeudan al actor el porcentaje que éste corresponda, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

Las sumas serán ajustadas conforme se señaló en la parte considerativa de la presente decisión, aplicando la fórmula allí indicada.

QUINTO: Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011, en cuanto se den los presupuestos allí indicados.

SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

SÉPTIMO: CONDENAR, en costas a la entidad demandada por la suma de OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 800.000), conforme lo expuesto.

OCTAVO: DISPONER la devolución del remanente de los gastos del proceso, si los hubiere, una vez liquidados por secretaría.

⁵ Folios 585 a 594 vltto.

Como fundamento de la decisión, el *A quo* refirió la aplicación del principio de la supremacía de la realidad sobre las formalidades y el desarrollo jurisprudencial del denominado "contrato realidad", posteriormente indicó que se encuentra probado que el demandante suscribió contratos de prestación de servicios con la entidad demandada, para desarrollar la activada de médico de consulta externa en el corregimiento de "Vegalarga" y demás veredas aledañas, en el periodo comprendido entre el 17 de noviembre de 2010 hasta el 20 de enero de 2012 y del 2 al 29 de febrero de 2012.

Manifestó que las actividades desempeñadas por el señor FERNANDO SÁNCHEZ RIVERA *"para con la ESE CARMEN EMILIA OSPINA, en las que fungiera durante diferentes periodos como Médico General del área rural, en las instalaciones de la ESE, durante jornadas no inferiores a 8 horas diarias y el resto de tiempo en disponibilidad permanente, incluyendo los fines de semana y festivos, y cumplir con las funciones correspondientes de medicina general y preventiva cuando la Institución lo requiriese"*; son del objeto social que por naturaleza desempeñan las empresas sociales del estado como lo es en este caso la ESE accionada.

Señaló que las funciones desempeñadas por el demandante no eran transitorias o esporádicas y *"por el contrario, se trató de una labor que se desarrolló de manera ininterrumpida durante 1 año 2 meses y 3 días, lapso comprendido desde el 17 de noviembre de 2010 hasta el 20 de enero de 2012 (iniciación del contrato No. 0873 de 2010 hasta la terminación del contrato No. 1517 de 2011) ; y 27 días más, desde el 2 de febrero de 2012 hasta el 29 de febrero de la misma anualidad (iniciación y terminación del contrato No. 407 de 2012)"*, con lo que se demostró la prestación personal del servicio.

Indicó, respecto a la subordinación que, el demandante estaba obligado a prestar su servicio 8 horas de conformidad con el cronograma de actividades elaborado por la demandada, constituyendo lo anterior una verdadera jornada laboral, además se probó que el supervisor del contrato ejercía funciones de superior jerárquico sobre el demandante.

Adujo que el actor realizó las mismas funciones que un Médico General de la planta de personal de la E.S.E Carmen Emilia Ospina, tal como se puede evidenciar según el manual de funciones asignados para dichos servidores públicos, lo que demuestra que el demandante no podía ejercer su oficio de Médico de forma autónoma e independiente, ni en el horario que él dispusiera.

Arguyó que la contraprestación del servicio también se encuentra probada con los honorarios que fueron cancelados por la entidad demandada en el desarrollo de los contratos de prestación de servicios suscritos. Por lo anterior consideró que en el presente caso se cumplieron con los tres elementos de una verdadera relación laboral y en consecuencia se debe declarar la nulidad del acto administrativo acusado y conceder las prestaciones sociales que no le fueron canceladas al demandante.

Señaló que no se reconocerán las horas extras y el trabajo suplementario toda vez que no se probó que horas adicionales laboró el médico demandante, tampoco la sanción moratoria sobre las cesantías, ya que la sentencia es la que constituye el derecho y ni la devolución de lo cancelado en virtud de las pólizas de seguros pertenecientes a los contratos.

Por último, señaló que no hay lugar a declarar prescripción sobre algún emolumento recocado, ya que la finalización de los contratos se dio en el año 2012 y el demandante reclamó el derecho el 9 de enero de 2015, es decir, dentro de los tres años siguientes a la finalización contractual, y condenó en costas a la entidad demandada.

2.6.- Recurso de apelación

El apoderado de la *entidad demandada* interpuso recurso de apelación mediante escrito radicado el 8 de noviembre de 2017⁶, solicitando revocar la sentencia apelada y que, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda.

⁶ Folios 139 a 144.

Sostuvo que *"el Despacho no realizó una apreciación integral de las situaciones de hecho y pruebas presentadas en el sumario, por lo cual, ante la carencia de elementos de convicción contundentes que acrediten la dependencia y subordinación del Contratista, queda sin sustento la declaratoria de un vínculo laboral"*

Desarrolló la anterior premisa, en el sentido de indicar que el elemento de la subordinación no se encuentra acreditado, toda vez que el señor FERNANDO SÁNCHEZ RIVERA, *"no estaba sometido al poder subordinante del empleador, por cuanto no recibía ningún tipo de orden del mismo o de algún jefe inmediato respecto a la ejecución de la labor contratada, así como tampoco estaba sometido a la fijación de un horario de trabajo, pues el actor en el interrogatorio de parte manifestó estar sólo, no tener un jefe directo de quien estuviera recibiendo órdenes, ni tampoco estar sometido a un cuadro de turnos, situación que el despacho no valoró en su debida forma."*

Afirmó que el actor, prestaba sus servicios como médico, vinculado mediante contratos de prestación de servicios, desarrollando su objeto contractual de manera autónoma e independiente, diferenciándose de las condiciones de la prestación del servicio de los médicos de planta; toda vez que el actor no cumplía un horario, ni estaba sometido a un cuadro de turnos, como sí lo hacen los médicos de planta, pues según la declaración rendida, el demandante informó que *"yo no tenía turnos... yo estaba solo" (Minuto 12:07 al 12:17).*

Adujo que no existe ninguna prueba que acredite la alegada subordinación del actor, pues no hay copia de llamados de atención, ni memorandos u oficios en los cuales se le dé algún tipo de orden al galeno en calidad de contratista.

Indicó que el demandante contaba con 10 días de descanso al mes, y en dicho lapso de tiempo no debía estar a disposición de la entidad, por lo tanto, si se ejerció alguna labor en el tiempo de descanso eso fue a costa y por voluntad del actor, lo que demuestra que no estaba subordinado a las órdenes del Hospital.

Agregó que, el cumplimiento de horario no es una circunstancia que demuestre la subordinación o dependencia como lo valoró el *A-quo*, así lo ha manifestado el Consejo de Estado, al señalar que el *"cumplimiento de un cuadro de turnos o de un horario puede no ser determinante, por cuanto en ocasiones tan solo constituye una concertación entre las partes para desarrollar el objeto del contrato"*.

Señaló que el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, prescribe la posibilidad de celebrar contratos de prestación de servicios con personas naturales cuando la actividad a contratar no puede ser realizada por el personal de planta de la entidad respectiva o cuando para tal efecto se requiere de conocimientos especializados, situación que ocurrió en el presente proceso, en razón a que se necesitó del demandante por sus conocimientos expertos.

Afirmó que no es real que el demandante tuviera que estar disponible las 24 horas del día, ya que el centro de salud de "Vegalarga", está habilitado para prestar los servicios de salud de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 02:00 p.m. a 6:00 p.m, si bien el actor pudo cumplir con horario nocturno, era bajo su cuenta y riesgo, o en cumplimiento al artículo 3 del código de ética médica.

Manifestó que, si bien el médico coordinador era a quien el actor debía dar razón y reportar todo lo que estaba haciendo, y revisaba y aprobaba las cuentas de cobro, es una situación que obedece a la supervisión que debe ejercerse respecto a todos los contratos, lo cual, no es suficiente para acreditar la subordinación, por tales razones solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y en su lugar se negaran las pretensiones de la demanda.

2.7.- Trámite de segunda instancia

El día 4 de abril de 2018 se llevó a cabo la audiencia de conciliación de que trata el artículo 192 del C.P.A.C.A., (fl. 610) la cual se declaró fallida ante la ausencia de ánimo conciliatorio de la parte actora, pues no aceptó el ofrecimiento de la entidad demandada, en consecuencia, en la misma providencia se concedió la apelación contra la sentencia de primera instancia.

A través de auto de 28 de junio de 2018⁷ se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y mediante providencia de 30 de agosto de 2018⁸, se corrió traslado por el término de 10 días para alegar de conclusión.

2.8.- Alegatos de conclusión segunda instancia

2.8.1. La *parte actora*, radicó escrito de alegatos de conclusión el día 10 de septiembre de 2018⁹, en el cual reiteró el contenido de las citas jurisprudenciales indicadas en los alegatos de primera instancia.

2.8.2. La *Entidad demandada* a través de escrito radicado el 13 de septiembre de 2018¹⁰ presentó sus alegatos de conclusión, replicando los expuestos en el recurso de apelación.

2.8.3. El *Ministerio Público* no emitió concepto en esta oportunidad.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia en segunda instancia

De conformidad con el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, los Tribunales Administrativos conocen en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias proferidas en primera instancia por los jueces administrativos.

En el asunto de la referencia interpuso recurso de apelación la parte demandada, solicitando revocar la sentencia proferida el 20 de octubre de 2017 por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva y que, en su lugar, se nieguen las súplicas de la demanda.

De acuerdo con lo anterior, en el presente caso se trata de apelante único, de manera que, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del

⁷ Folio 7 cdno. Segunda Instancia
⁸ Folio 12 cdno. Segunda Instancia.
⁹ Folios 17 a 27. Segunda Instancia
¹⁰ Folios 18 y 19. C. segunda instancia.

Proceso, el cual resulta aplicable por remisión expresa del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, la competencia del juez en segunda instancia se reduce al análisis de los puntos objeto del recurso.

Al respecto, el inciso primero del artículo referido preceptúa lo siguiente:

"ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. *El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.*

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

(...)"

En efecto, tratándose de apelante único, la competencia del Juez de segunda instancia se encuentra circunscrita a los motivos de la impugnación, de modo que, no le es dado entrar a analizar la providencia recurrida en los aspectos que no fueron objeto de la apelación, salvo el análisis correspondiente de los presupuestos procesales para decidir.

En este orden de ideas, la Sala advierte que en el presente caso no se encuentra reparo alguno en lo que tiene que ver con la oportunidad de la presentación de la demanda, el cumplimiento del requisito de procedibilidad y la legitimación de hecho en la causa de las partes, en consecuencia, se procederá a abordar el estudio de fondo del asunto, teniendo en cuenta los aspectos sobre los cuales recae la apelación.

3.2.- Planteamiento del caso

En el caso objeto de estudio, el señor Fernando Sánchez Rivera demandó la nulidad del oficio No. 01-TH-000485-S-2015 del 4 de febrero de 2015 por el cual la entidad demanda negó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales derivadas de los contratos de prestación de servicio suscrito entre las partes, y a título de restablecimiento solicitó que se condene a esta entidad a reconocer la existencia de un contrato realidad suscrito con el demandante y por consiguiente

el reconocimiento, liquidación y pago de todos los emolumentos laborales frutos de esa relación laboral que existió.

El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva, en sentencia dictada el 20 de octubre de 2017, accedió a las pretensiones de la demanda, ordenando el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales tomando como base los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios, desde el 17 de noviembre de 2010 al 20 de enero de 2012 y del 2 al 29 de febrero de 2012.

Por su parte, la *E.S.E Carmen Emilia Ospina*, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia solicitando revocarla y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, señalando que no se habían probado los elementos de una relación laboral, en especial el de la subordinación, toda vez que el demandante no cumplía horarios, no recibía órdenes y tenía plena autonomía e independencia para desarrollar el objeto contractual.

3.3.- Problema jurídico

Conforme a las precisiones hechas en precedencia, el problema jurídico en el presente caso consiste en determinar si se debe o no revocar la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva el 20 de octubre de 2017, en tanto declaró la nulidad del acto acusado y ordenó a la entidad demandada el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales por el tiempo en que se ejecutaron los contratos de prestación de servicios; para, en su lugar, negar tal reliquidación.

Para efectos de resolver el problema jurídico planteado, la Sala desarrollará el siguiente orden metodológico: i) hechos probados, ii) Marco normativo del principio de la supremacía de la realidad sobre las formalidades; y iii) análisis del caso concreto.

3.5. Hechos probados

- Contratos de prestación de servicios en las que se observa que la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina contrató los servicios profesionales de la demandante por los siguientes periodos y finalidades:

CONTRATO	PERÍODO	OBJETO
873 de 2010 (fls. 36 a 39)	Del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2010	<i>Prestar sus servicios como médico en la zona rural a los usuarios de la E.S.E Carmen Emilia Ospina</i>
Adición 1 al contrato 873 de 2010 (fls. 40 y 41)	Del 1º al 31 de enero de 2011	<i>Prestación de servicios como médico de la E.S.E</i>
22 de 2011 (fls. 42 a 45)	Del 1º de febrero al 31 de mayo de 2011	<i>Prestar sus servicios como médico en la zona rural a los usuarios de la E.S.E Carmen Emilia Ospina.</i>
732 de 2011 (fls. 46 a 49)	Del 1º de junio al 30 de septiembre de 2011	<i>Prestar sus servicios como médico de consulta externa a los usuarios de la E.S.E Carmen Emilia Ospina.</i>
Adición 1 al contrato 732 de 2011 (fls. 50 y 51)	Del 1º octubre al 30 de noviembre de 2011	<i>Prestación de servicios como médico de la E.S.E</i>
1517 de 2011 (fls. 52 a 55)	Del 1º de diciembre de 2011 al 20 de enero de 2012	<i>Prestar sus servicios como médico de consulta externa a los usuarios de la E.S.E Carmen Emilia Ospina.</i>
407 de 2012 (fls. 56 a 59)	Del 1º al 29 de febrero de 2012	<i>Prestar sus servicios como médico de consulta externa a los usuarios de la E.S.E Carmen Emilia Ospina.</i>

- Actas de liquidación de los anteriores contratos (Fls. 136 a 147).
- Calificación de servicios del demandante de cada contrato en las cuales superó el puntaje mínimo fijado por la Entidad (fl. 155, 223, 231, 260, 265, 356).
- Cronograma de actividades desarrolladas por el demandante en el mes de enero de 2012 (fl. 157)
- Cronograma de actividades de los meses de enero a diciembre de 2011 (fl. 358, 308, 305, 306, 287, 278, 272 y 162).
- Cronograma de actividades de los meses de noviembre y diciembre de 2010 (fl. 380 y 364).

- Extracto de la hoja de vida del demandante, en la que consta que no posee antecedentes disciplinarios, fiscales y penales, y que es médico cirujano desde el 4 de abril de 1977 (fls. 180 a 199).
- Certificación de cumplimiento del contrato 732 de 2011 (fl. 275).
- Manual de funciones y competencias laborales de un médico general, código 211, grado 17 (fl. 526 y 527)
- En la audiencia de pruebas del 28 de septiembre de 2017 se recibió el interrogatorio de parte de señor Fernando Sánchez Rivera (fls. 532 a 534), en la indicó:

"Tener estudios universitarios de profesión médico cirujano, actualmente labora en el Hospital del Municipio de Algeciras. Manifiesta que es cierto que él suscribió un contrato de prestación de servicios con la Carmen Emilia Ospina y fue destinado al puesto de salud de Vegalarga, inició labores el 17 de noviembre de 2010 y terminó el 29 de enero de 2012. Al preguntársele si es cierto que él suscribió en total cinco (5) contratos de prestación de servicios con dos (2) adiciones, y con cada contrato de prestación de servicios a la terminación del mismo se suscribía un acta de liquidación y terminación del contrato declarándose a paz y salvo con la entidad; manifestó que es cierto que suscribió contratos independientes. Señala que las actividades que desarrollaba eran consulta externa durante 9 horas, con un receso a las 12 del día para tomar los alimentos, reiniciar a la 1 de la tarde y terminar a las 5 de la tarde del mismo día, todos los días incluso sábados y domingos y disponibilidad a toda hora, él se encontraba solo y prácticamente hacia todo, urgencias, brigadas de salud en las diferentes veredas, todo lo que se pudiera presentar, remisiones, hospitalización, atendía partos. No existían más médicos, nunca le asignaron un ayudante u otro colega que lo pudiera reemplazar en cualquier momento. La apoderada pone de presente al testigo que en el centro de salud de Vegalarga para el año 2010 - 2012, no se encontraba habilitado para prestar servicios de urgencias, hospitalización o partos. Al preguntársele como hacía él para prestar dichos servicios sin contar con la habilitación. Contestó que hasta donde él sabe el 1 Nivel está habilitado para atender partos de emergencia de lo contrario se debe remitir a otro nivel pues pasó a manos de especialista, señala que no fueron muchos los partos que atendió, aproximadamente dos (2) o cuatro (4), a cualquier hora de la madrugada debía prestar sus servicios pues el único era él, debía atender al paciente, hacer la remisión y seguir trabajando. Explica que desarrollaba sus actividades y cada mes entregaba lo desarrollado en ese periodo; él no podía sustraerse a atender una urgencia o emergencia, era su deber atender lo que llegara, entonces estaba trabajando mucho más de nueve (9) horas. Manifiesta que no tenía un sistema de turnos, él mismo hacía sus turnos, tenía que arreglárselas solo pues no tenía nadie que le ayudara. Señala que las

consultas todas las realizaba él, en el curso de la mañana, tarde o en la madrugada tenía que atender cualquier emergencia. Explica que él salía a descansar entre comillas pues en cualquier momento lo podían llamar y tenía que acudir como fuera. Manifiesta que prácticamente descanso no tuvo. Se decía que descansaba 10 días y aunque estaba en la casa, no se podía mover para ninguna parte porque en cualquier momento las auxiliares lo llamaban y él no podía escoger si acudir o no, más cuando en esa época era una zona conflictiva. Manifiesta que las brigadas se hacían de manera planificada, salían desde las siete (7) de la mañana, pero con la condición que ante cualquier emergencia la ambulancia debía llevarlo de regreso al hospital; se programaban nueve (9) horas continuas en la vereda y al regresar, si había gente represada debía atenderla y ampliar su horario de trabajo. En las brigadas se atendían de 50 a 60 consultas externas y en ocasiones se presentaban casos que requerían remisión a nivel de mayor complejidad. Al preguntársele si en el centro de salud de Vegalarga había algún funcionario de mayor jerarquía al cargo que él desempeñaba, que le impartiera órdenes o diciendo como ejecutar sus actividades contractuales. Manifestó que no existió tal funcionario, no había a quien expresarle sus inquietudes, tenía que llamar a Neiva o venir hasta acá, a fin de mes cuando iba a pasar la cuenta de cobro él tenía que responderle a un jefe inmediato, el médico coordinador, en una oportunidad que reprogramó consultas y adelantó brigadas por un caso de fuerza mayor, Le dijo que no podía tomarse esas atribuciones y le descontaron un dinero...."

3.6 Marco normativo y jurisprudencial aplicable de los elementos de la relación laboral

La Sala advierte que cuando se configura una relación laboral que ha sido encubierta por órdenes de prestación de servicios, hay lugar al reconocimiento y pago de prestaciones sociales en aplicación del principio de prevalencia de la realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo (art. 53 C.P.). En consecuencia, es pertinente analizar las características de los contratos de prestación de servicios, los cuales fueron estudiados por la Corte Constitucional, así:

"a. La prestación de servicios versa sobre una obligación de hacer para la ejecución de labores en razón de la experiencia, capacitación y formación profesional de una persona en determinada materia, con la cual se acuerdan las respectivas labores profesionales.

"El objeto contractual lo conforma la realización temporal de actividades inherentes al funcionamiento de la entidad respectiva, es decir, relacionadas con el objeto y finalidad para la cual fue creada y organizada...

"b. La autonomía e independencia del contratista desde el punto de vista técnico y científico, constituye el elemento esencial de este contrato. Esto significa que el contratista dispone de un amplio margen de discrecionalidad en cuanto concierne a

la ejecución del objeto contractual dentro del plazo fijado y a la realización de la labor, según las estipulaciones acordadas.

"Es evidente que por regla general la función pública se presta por parte del personal perteneciente a la entidad oficial correspondiente y sólo, excepcionalmente, en los casos previstos, cuando las actividades de la administración no puedan realizarse con personal de planta o requieran de conocimientos especializados, aquellas podrán ser ejercidas a través de la modalidad del contrato de prestación de servicios".

"c. La vigencia del contrato es temporal y, por tanto, su duración debe ser por tiempo limitado y el indispensable para ejecutar el objeto contractual convenido. En el caso de que las actividades con ellas atendidas demanden una permanencia mayor e indefinida, excediendo su carácter excepcional y temporal para convertirse en ordinario y permanente, será necesario que la respectiva entidad adopte las medidas y provisiones pertinentes a fin de que se dé cabal cumplimiento a lo previsto en el artículo 122 de la Carta Política, según el cual se requiere que el empleo público quede contemplado en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente"¹¹ (Resalta la Sala).

De lo anterior se colige que para que un contrato de prestación de servicios no se desnaturalice se requiere que exista una prestación del servicio realizada en forma autónoma y que el objeto contractual sea temporal.

En lo referente al contrato realidad sobre las órdenes de prestación de servicios el Órgano Vértice de la Jurisdicción Contencioso Administrativa señaló:

"Así las cosas, se concluye que para acreditar la existencia de una relación laboral, es necesario probar los tres elementos referidos, pero especialmente, que el supuesto contratista desempeñó una función pública en las mismas condiciones de subordinación y dependencia que sujetarían a cualquier otro servidor público, constatando de esta manera, que las actividades realizadas no son de aquellas indispensables en virtud de la necesaria relación de coordinación entre las partes contractuales.

*Por el contrario, existirá una relación contractual regida por la Ley 80 de 1993, cuando: a) se pacte la prestación de servicios relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad pública, b) el contratista es autónomo en el cumplimiento de la labor contratada, c) se le paguen honorarios por los servicios prestados y d) la labor contratada no pueda realizarse con personal de planta o se requieran conocimientos especializados. **Sobre esta última condición para suscribir contratos de prestación de servicios, vale la pena señalar que debe ser entendida a aquellos casos en los que la entidad pública contratante requiere adelantar labores ocasionales, extraordinarias, accidentales o que temporalmente exceden su capacidad organizativa y funcional, pues se desdibujaría la relación contractual cuando se contratan por prestación de servicios a personas que deben desempeñar***

¹¹ Corte Constitucional, sentencia C-154 de 1997. Magistrado Ponente Dr. Hernando Herrera Vergara

exactamente las mismas funciones que, de manera permanente, se asignan a los empleados públicos.

Cuando se logra desvirtuar el contrato de prestación de servicios, inexorablemente conduce al reconocimiento de las prestaciones sociales causadas por el periodo realmente laborado, atendiendo a la causa jurídica que sustenta verdaderamente dicho restablecimiento, que no es otra que la relación laboral encubierta bajo un contrato estatal, en aplicación de los principios de igualdad y de irrenunciabilidad de derechos en materia laboral consagrados en los artículos 13 y 53 de la Carta Política respectivamente, superándose de ésta manera la prolongada tesis que prohibía la figura indemnizatoria como resarcimiento de los derechos laborales conculcados. (...)

Bajo las anteriores precisiones se ha concretado el tratamiento jurisprudencial de los contratos realidad, de donde se concluye en cuanto a su configuración, que constituye un requisito indispensable para demostrar la existencia de una relación de trabajo, que el interesado acredite en forma incontrovertible los tres elementos de la relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio (de manera permanente), la remuneración respectiva y especialmente la subordinación y dependencia en el desarrollo de una función pública, de modo que no quede duda acerca del desempeño del contratista en las mismas condiciones de cualquier otro servidor público, siempre y cuando la subordinación que se alega no se enmarque simplemente en una relación de coordinación entre las partes para el desarrollo del contrato, en virtud de las particularidades de la actividad para la cual fue suscrito"¹² (Negrilla fuera de texto).

En otra oportunidad indicó:

"La existencia de un contrato de prestación de servicios que genere que la prestación del servicio se dé a favor de un tercero ajeno a este contrato de prestación de servicios, no impide que encontrándose reunidos los requisitos de la relación laboral, se declare su existencia, en desarrollo del principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formalidades, como una verdadera garantía de los derechos de los trabajadores.

Acorde con el argumento precedente, en los casos en que el operador jurídico verifique que entre quien presta el servicio y la entidad donde este se ejecuta están presentes los elementos de la relación laboral, esta no puede desconocerse por el hecho de que por la prestación cumplida se recibió un pago por parte de un tercero, denominado contratante, pues se debe enfatizar que precisamente esta remuneración se derivó por la labor cumplida o realizada en la entidad beneficiada a título de contraprestación del servicio.

Servicio que, se insiste, si se dio bajo las condiciones de una relación laboral, debe ser reconocido como tal, pues la remuneración es originada por la prestación personal de quien se identifica como contratista, en el contrato original de prestación de servicios.

No se puede por la formalidad del contrato de prestación de servicio, desconocerse el verdadero vínculo que subyace y que genera una relación laboral, al verificarse que el pago se realizó por un tercero aparentemente sólo por la labor cumplida,

¹² Consejo de Estado Sección Segunda. Sentencia del 19 de febrero de 2009. Rad. No. 3074-2005. C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.

*pues precisamente esta remuneración se deriva del trabajo realizado personalmente en la entidad que efectivamente se benefició de la labor, es decir que debe resaltarse que el elemento económico de la prestación sí existe pues esta remuneración se reconoce por el servicio prestado directamente a la entidad.*⁴³

Igualmente, en Sentencia de Unificación del 25 de agosto de dos mil dieciséis (2016), precisó:

"Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de prestación de servicios independientes; En efecto, para que aquél se configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada.

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios independiente.

*Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos del contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo (...)"*⁴⁴.

Es del caso destacar que para establecer si existe autonomía o subordinación de las personas que se encuentran vinculadas mediante contrato de prestación de servicios, la Corporación en cita ha señalado que es necesario realizar un profundo

⁴³ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección "B". Consejero Ponente: Gerardo Arianas Monsalve. Sentencia de 15 de junio de 2011. Radicación número: 25000-23-25-000-2007-00395-01 (1129-10). Actor: Manuel Alejandro Fula Rojas. Demandado: Unidad Administrativa Especial De Aeronáutica Civil.

⁴⁴ Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Consejero ponente: Carmel Perdomo Cuéter Bogotá, D.C. veinticinco 25 de agosto de dos mil dieciséis (2016) Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho Expediente 23001233300020130026001 (C0882015)

análisis probatorio, pues no basta acreditar el cumplimiento de horario o una relación coordinada entre la Entidad y el contratista.

Así las cosas, existe la posibilidad de acceder a las pretensiones cuando la Administración desconoce ordenamientos superiores y en vez de nombrar a una persona para que ocupe un empleo público, celebra con ella contratos de prestación de servicios para evitar el pago de prestaciones. La prosperidad de las pretensiones sólo se podrá determinar en el caso concreto luego de efectuada la valoración probatoria para establecer si en la prestación del servicio existió subordinación o coordinación.

3.7. Análisis del caso concreto

Afirma el recurrente que en el presente caso no se dieron los elementos constitutivos de una relación laboral en especial el de subordinación, ya que consideró que el *A-quo* no valoró en debida forma las pruebas obrantes en el proceso y la declaración de parte practicada al actor.

Conforme lo anterior, la Sala entrara a analizar cada uno de los elementos constitutivos de la relación laboral, con el fin de determinar si al recurrente le asiste razón en su argumento.

3.7.1 Prestación personal del servicio

La Sala observa que el señor Fernando Sánchez Rivera suscribió los siguientes contratos con la E.S.E Carmen Emilia Ospina para prestar sus servicios en la zona rural de "Vegalarga", Municipio de Neiva, Huila, durante los siguientes periodos y finalidades:

CONTRATO	PERÍODO	OBJETO	INTERRUPCIÓN
873 de 2010 (fls. 36 a 39)	Del 17 de noviembre al 31 de diciembre de 2010	<i>Prestar sus servicios como médico en la zona rural a los usuarios de la E.S.E Carmen Emilia Ospina</i>	-
Adición 1 al contrato 873 de 2010 (fls. 40 y 41)	Del 1º al 31 de enero de 2011	<i>Prestación de servicios como médico de la E.S.E</i>	0

22 de 2011 (fls. 42 a 45)	Del 1° de febrero al 31 de mayo de 2011	<i>Prestar sus servicios como médico en la zona rural a los usuarios de la E.S.E Carmen Emilia Ospina.</i>	0
732 de 2011 (fls. 46 a 49)	Del 1° de junio al 30 de septiembre de 2011	<i>Prestar sus servicios como médico de consulta externa a los usuarios de la E.S.E Carmen Emilia Ospina.</i>	0
Adición 1 al contrato 732 de 2011 (fls. 50 y 51)	Del 1° octubre al 30 de noviembre de 2011	<i>Prestación de servicios como médico de la E.S.E</i>	0
1517 de 2011 (fls. 52 a 55)	Del 1° de diciembre de 2011 al 20 de enero de 2012	<i>Prestar sus servicios como médico de consulta externa a los usuarios de la E.S.E Carmen Emilia Ospina.</i>	0
407 de 2012 (fls. 56 a 59)	Del 1° al 29 de febrero de 2012	<i>Prestar sus servicios como médico de consulta externa a los usuarios de la E.S.E Carmen Emilia Ospina.</i>	11

De las pruebas documentales, se colige que el demandante prestó sus servicios para la Entidad demandada como Medico General por un lapso de tiempo superior a un año en el periodo comprendido entre el 15 de octubre de 2010 hasta el 29 de febrero de 2012, con una interrupción de 11 días comprendida entre el 20 de enero al 1° de febrero de 2012, circunstancias que demuestran la prestación personal del servicio como primer elemento de la relación laboral.

3.7.2 Continuidad en la prestación del servicio

Se tiene acreditado que la demandante suscribió cinco contratos de prestación de servicios sucesivos con la E.S.E Carmen Emilia Ospina, con los cuales se demuestra la continuidad en la prestación del servicio, desde noviembre de 2010 a febrero de 2012.

Al respecto, es necesario tener en cuenta que, en materia de aplicación del principio de realidad sobre las formas, el elemento de continuidad en la prestación del servicio, no puede ser interpretado de manera estricta. Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional¹⁵ ha señalado que:

*"La jurisprudencia colombiana permite establecer algunos criterios que definen el concepto de **función permanente** como elemento, que sumado a la prestación*

¹⁵ Sentencia C-614/09.

de servicios personales, subordinación y salario, resulta determinante para delimitar el campo de la relación laboral y el de la prestación de servicios, a saber:

i) Criterio funcional: la ejecución de funciones que se refieren al ejercicio ordinario de las labores constitucional y legalmente asignadas a la entidad pública (artículo 121 de la Constitución) deben ejecutarse, por regla general, mediante el empleo público. En otras palabras, si la función contratada está referida a las que usualmente debe adelantar la entidad pública, en los términos señalados en el reglamento, la ley y la Constitución, será de aquellas que debe ejecutarse mediante vínculo laboral. (...)

ii) Criterio de igualdad: Si las labores desarrolladas son las mismas que las de los servidores públicos vinculados en planta de personal de la entidad y, además se cumplen los tres elementos de la relación laboral, debe acudirse a la relación legal y reglamentaria o al contrato laboral y no a la contratación pública (Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia citada del 6 de septiembre de 2008¹⁶).

*iii) Criterio temporal o de la habitualidad: Si las funciones contratadas se asemejan a la constancia o cotidianidad, que conlleva el cumplimiento de un horario de trabajo o la realización frecuente de la labor, surge una **relación laboral y no contractual** (Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia ya citada del 3 de julio de 2003¹⁷). Dicho en otros términos, si se suscriben **órdenes de trabajo sucesivas**, que muestra el indiscutible ánimo de la administración por emplear de modo permanente y continuo los servicios de una misma persona, y de esa manera, se encuentra que no se trata de una relación o vínculo de tipo ocasional o esporádico, es lógico concluir que nos referimos a una verdadera relación laboral.*

*iv) Criterio de la excepcionalidad: si la tarea acordada corresponde a "actividades nuevas" y éstas no pueden ser desarrolladas con el personal de planta o se requieren conocimientos especializados o de actividades que, de manera laboral para el personal de planta, puede acudirse a la contratación pública (Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 21 de febrero de 2002¹⁸ a que se ha hecho referencia). Por el contrario, si la gestión contratada equivale al "giro normal de los negocios" de una empresa debe corresponder a una relación laboral y no puramente contractual (...)" - **Resaltado por la Sala** -*

En el caso *sub examine* se evidencia que los contratos se celebraron por un período superior a un año en el que se presentó una interrupción, la cual no superó los 15 días; en consecuencia, se debe entender que el demandante no perdió continuidad en la prestación del servicio contratado.

En ese orden de ideas, se estima que aun cuando se presentó una interrupción contractual, la cual se reitera no superó los 15 días, la prestación del servicio fue permanente comoquiera que en los términos de la Corte Constitucional "*Si las funciones contratadas se asemejan a la constancia o cotidianidad, que conlleva*

¹⁶ Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, expediente 2152-06.

¹⁷ Consejero Ponente: Alejandro Ordoñez Maldonado, expediente 4798-02.

¹⁸ Consejero Ponente: Jesús María Lemos Bustamante, expediente 3530-2001

el cumplimiento de un horario de trabajo o la realización frecuente de la labor”, es decir, que la labor desempeñada por la demandante se desarrolló en la misma forma y continuidad que la venía ejerciendo desde la suscripción del primer contrato de prestación de servicios

En otro aspecto, la función permanente como mecanismo para demostrar la relación laboral, no depende únicamente del elemento temporal, sino por el contrario deben ser acreditados los demás criterios, como la igualdad de funciones prestadas por el actor en la prestación del servicio para la Entidad, el desarrollo de las mismas funciones por los servidores de la demandada y la prestación sucesiva del servicio.

En ese contexto jurisprudencial, en el caso en concreto se tienen acreditados los siguientes criterios:

- Desde el punto de vista funcional, es absolutamente claro que el demandante desempeñaba una función institucional propia de la entidad, como lo es la prestación del servicio de la Salud, además en el manual de funciones se tiene prevista una estructura funcional compuesta por Médicos Generales, tal como se desprende de la Resolución No. 264 del 2 de septiembre de 2014 (fl. 523) y del manual de funciones asignados para tal empleo público (fl. 526 y 527), para realizar actividades de consulta médica general, relacionadas con la promoción de la salud, funciones que fueron desarrolladas por el demandante.

La función de médico que desempeñó el demandante, corresponden al ejercicio ordinario de las labores legalmente asignadas a la entidad pública E.S.E Carmen Emilia Ospina que deben ejecutarse, por regla general, mediante el empleo público.

Según el “*MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES*”(fl. 526 y 527) estableció que el empleo de Médico General Código 211, Grado 17 ejerce las siguientes funciones, las cuales se compararan con las obligadas por el contratista, de la siguiente manera:

OBLIGACIONES DESARROLLADAS POR EL DEMANDANTE COMO CONTRATISTA (contratos fls. 36 y ss)	FUNCIONES ASIGNADAS AL CARGO DE MÉDICO GENERAL CÓDIGO 211, GRADO 17 (fl. 526)
Atender pacientes de la entidad realizando diagnóstico inicial, clasificación del riesgo, definir plan de manejo y terapéutico a los usuarios que solicitan consulta médica.	Atender a los usuarios asignados en los diferentes servicios
Brindar atención médica a la población en general con su respectivo diagnóstico y tratamiento.	Establecer el tratamiento correspondiente, solicitar ayudas diagnósticas pertinentes de acuerdo con las guías de práctica clínica adoptadas por la entidad.
Prestar servicios de consulta externa, realizar las acciones de p y p, servicios de urgencias de baja complejidad a los usuarios de la ESE Carmen Emilia Ospina...	Realizar actividades de consulta médica general. Atender urgencias, ordenar análisis y exámenes de laboratorio y estudiar los resultados.
Diligenciar los registros existentes y necesarios para la atención médica tales como historias clínicas, formatos de laboratorio, medicamentos, referencias RIPS, registros diarios y otros.	Elaborar la historia clínica completa en la atención de primera vez, registros clínicos: de seguimiento control o nuevo motivo de consulta.
Establecer buena comunicación y brindar adecuada información y educación al paciente y a su familia en aspectos relacionados con el diagnóstico, manejo y pronóstico.	Atender a los usuarios asignados en los diferentes servicios.
Cumplir con la entrega y recibo de pacientes del que le corresponda de acuerdo a la programación.	Cumplir con las metas de productividad y rendimiento pactadas en el área de servicio.
Prestar disponibilidad para atención de consulta médica no programada.	

<i>El profesional deberá tener permanencia en la zona rural durante los 30 días del mes y se tendrá que desplazar a las veredas aledañas para realizar las actividades descritas anteriormente</i>	
<i>Ejercer acciones de referencia y contrarreferencia, de acuerdo al sistema de remisión de pacientes.</i>	<i>Solicitar interconsultas o remisiones de acuerdo a los criterios de referencia definidos en las guías de práctica clínica para la continuidad de la atención.</i>
<i>Identificar patologías que pertenezcan a programas de vigilancia epidemiológica en todas aquellas situaciones que sean factor de riesgo para la población</i>	<i>Realizar actividades de promoción de la salud, detección precoz y protección específica tendientes a mantener el estado de salud de la población a cargo.</i> <i>Cumplir con el reporte de enfermedades de interés en salud pública.</i>
<i>Ejecutar programas educativos de promoción y prevención de la salud y saneamiento básico.</i>	<i>Apoyar los procesos de docencia servicio e investigación científica, adelantados por la institución.</i>
<i>Impartir capacitación, adiestramiento, inducción e instrucción al personal relacionado con el área y en desarrollo a los convenios docencia, prestación de servicios suscritos por la entidad</i>	
<i>las demás actividades anexas o complementarias propias de la medicina</i>	<i>Ejercer las demás funciones asignadas por autoridad competente, que sean afines con el nivel, naturaleza, área de desempeño del cargo y demás que le asigne la ley.</i>

Así las cosas, es del caso mencionar que las funciones ejecutadas por el demandante correspondían a la función social y al giro ordinario de la E.S.E Carmen Emilia Ospina, que debían ser desempeñadas por el personal de planta, comoquiera que en las obligaciones contractuales se pactaron para prestar toda la atención en salud respecto a la medicina general de los usuarios de la Entidad.

De la confrontación del objeto contractual y el manual de funciones se infiere que las funciones desarrolladas por el demandante corresponden a las mismas previstas para el cargo propio de planta de Médico General Código 211, Grado 17, por consiguiente, se considera que se acreditó que el demandante desarrolló sus funciones en igualdad de condiciones que la persona de planta que desempeñaba dicho cargo.

Si bien, la recurrente indicó que en el centro de salud en el que el demandante desempeñaba sus funciones, *"no cuenta con habilitación para prestar los servicios de Urgencias, ni de Hospitalización, ni de partos"*, precisa la Sala que dicha afirmación no se acompasa con las obligaciones pactadas con el actor, pues se obligó a atender cualquier urgencia y las demás actividades de la medicina en favor de los usuarios de la E.S.E demandada.

Para el Consejo de Estado, *"(...) la vinculación por contrato de prestación de servicios es de carácter excepcional, a través de la cual **no pueden desempeñarse funciones públicas de carácter permanente o de aquellas que se encuentren previstas en la ley o el reglamento para un empleo público***¹⁹*"*, por lo tanto, se estima que no es admisible que la entidad haya contratado por prestación de servicios al demandante por un periodo de 1 año, 3 meses y 14 días, cuando, por tratarse en una función institucional con proyección de permanencia, lo propio era haber ampliado la planta de personal en orden a garantizar la adecuada prestación del servicio, pues esa vinculación contractual por un periodo tan largo comporta un desconocimiento de los derechos laborales de una persona que cumple la misma función que un empleado de planta pero que no recibe todos los beneficios prestacionales de éstos.

- En cuanto al criterio de habitualidad, es diáfano que la labor desempeñada por el demandante por un periodo superior a un año, configuró una relación laboral de carácter sucesiva; y si bien se presentó una interrupción contractual, ésta no superó los 15 días, además, que la prestación del servicio se desarrolló prácticamente en las mismas condiciones temporales de los médicos de planta, situación que es afirmada por el demandante al señalar que *"las actividades que*

¹⁹ *Ibidem.*

desarrollaba eran consulta externa durante 9 horas, con un receso a las 12 del día para tomar los alimentos, reiniciar a la 1 de la tarde y terminar a las 5 de la tarde del mismo día”.

En ese sentido, tampoco le asiste razón al recurrente cuando indicó que las laborales desempeñadas por el contratista eran diferentes a la desarrolladas por los médicos de planta de la entidad, toda vez que se comprobó que ejercían las mismas actividades relacionadas con la atención inicial de pacientes y en una jornada laboral.

- Finalmente, del contenido de las obligaciones contractuales no se evidencia un conocimiento técnico o científico del demandante que justificara su vinculación por prestación de servicios y que no pudiera ser desarrollado por otro profesional de planta, por consiguiente, también se descarta la aplicación del criterio de la excepcionalidad.

Así las cosas, en el caso de autos está acreditado que el demandante prestó de manera habitual sus servicios a favor de la Entidad demandada, en las mismas condiciones que el personal de planta, por consiguiente, es claro que el vínculo de ninguna manera fue temporal ni obedeció a circunstancias excepcionales o accidentales, por el contrario, fue una función institucional propia del giro ordinario de la Entidad que se desarrolló por un largo tiempo.

3.7.3. De la subordinación

Sobre el particular, expresa la demandada que el actor desarrolló el objeto contractual con autonomía e independencia, pues no tenía un jefe, no cumplía horario, no tenía que estar siempre disponible para la Entidad y por último que sobre el actor se ejerció una actividad de coordinación, mas no de subordinación.

Para esta Sala, resulta primordial establecer la existencia de la subordinación, dado que este elemento es el que marca la diferencia entre el contrato de prestación de servicios y una relación laboral y es sobre el punto en el que más insiste la entidad recurrente. En tal sentido, se pronunció la Corte Constitucional en sentencia C-154

de 1997, al analizar las diferencias existentes entre la vinculación de personal por contrato de trabajo y por orden de prestación de servicios, así:

"(...) Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada.

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios independiente"²⁹ (Negrilla fuera de texto).

Con el fin de establecer la subordinación de las personas que se encuentran vinculadas mediante contrato de prestación de servicios, el Consejo de Estado ha señalado que es necesario realizar un análisis juicioso, por cuanto no basta acreditar el cumplimiento de horario o una relación coordinada entre la entidad y el contratista. Sobre el punto dicha Corporación se pronunció, así:

"Si bien es cierto que la actividad del contratista puede ser igual a la de empleados de planta, no es menos evidente que ello puede deberse a que este personal no alcance para colmar la aspiración del servicio público; situación que hace imperiosa la contratación de personas ajenas a la entidad. Y si ello es así, resulta obvio que deben someterse a las pautas de ésta y a la forma como en ella se encuentran coordinadas las distintas actividades. Sería absurdo que contratistas encargados del aseo, que deben requerirse con urgencia durante la jornada ordinaria de trabajo de los empleados, laboren como ruedas sueltas y a horas en que no se les necesita. Y lo propio puede afirmarse respecto del servicio de cafetería, cuya

²⁹ Sentencia C- 154 de 19 – 03-1997 M.P. Hernando Herrera Vergara

prestación no puede adelantarse sino cuando se encuentra presente el personal de planta. En vez de una subordinación lo que surge es una actividad coordinada con el quehacer diario de la entidad, basada en las cláusulas contractuales.²¹

Así mismo, se advierte que, en los casos de servicios de la salud, como el que prestaba el demandante, la jurisprudencia ha señalado *"en el ejercicio de su cargo, ejecutaba labores propias de las funciones asignadas a esa entidad, pues su objetivo era brindar apoyo en el área de Terapia Respiratoria dentro del giro ordinario de la E.S.E. Luis Carlos Galán Sarmiento. Las funciones o responsabilidades que se le habían asignado no eran temporales, pues basta con observar que permaneció prestando sus servicios desde el 16 de octubre de 1997 hasta el 31 de octubre de 2007, en la E.S.E. Luis Carlos Galán Sarmiento, institución que prestaba el servicio de salud en forma permanente, no contaba con autonomía e independencia para realizar las labores encomendadas, debía estar atenta a las instrucciones que se le impartieran, estaba sujeto a un horario de trabajo, es decir, era dependiente y sometido a la subordinación, elementos propios de la relación laboral, no de un contrato de prestación de servicios²²".* (Negrilla extra texto).

En el caso *sub examine*, la Sala encuentra acreditados los siguientes criterios que permiten inferir que efectivamente hubo subordinación por parte de la E.S.E Carmen Emilia Ospina frente al demandante:

En el objeto contractual se estipuló que el demandante presta sus servicios profesionales como Médico de consulta externa (fl. 46) y señaló que los servicios de urgencias y los relacionados con el objeto se realizarían zona rural corregimiento de Vegalarga" del municipio de Neiva, Huila "y veredas aledañas con los usuarios de la ESE Carmen Emilia Ospina (fl. 37), por lo que se observa que el demandante demostró que sus funciones siempre las desarrolló en las instalaciones y con los recursos del Hospital, por consiguiente, se infiere que en

²¹ Consejo de Estado, Sección segunda, sentencia proferida el 28 de julio de 2005, Radicación No 50001-23-31-000-2000-00262-01(5212-03), Actor: Sandra Patricia Rey Forero

²² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de 17 de abril de 2013 Expediente No. 1883-12, Magistrado Ponente: Alfonso Vargas Rincón

realidad la relación contractual no se ejecutó con independencia ni con los recursos propios del contratista, tanto así que se pactó que el demandante debía *"responder y velar por el buen uso y mantenimiento de los bienes y elementos entregados por el contratante"* (fl. 47), circunstancia esta que comporta un criterio de determinación de subordinación.

Igualmente se pactaron las siguientes obligaciones, *"Prestar disponibilidad para atención de consulta médica no programada"* y *"El profesional deberá tener permanencia en la zona rural durante los 30 días del mes y se tendrá que desplazar a las veredas aledañas para realizar las actividades descritas anteriormente"*, circunstancia contraria a lo indicado por la demandada cuando señaló que el actor tenía 10 días de descanso y no debía estar en constante disposición con la entidad, es así que tales compromisos anulan la libertad en la prestación del servicio del demandante, pues no podía disponer de su tiempo para realizar actividades distintas a su profesión fuera del lugar donde ejercía sus funciones, toda vez que se vio obligado a estar la totalidad del tiempo disponible a favor de la entidad contratante.

Asimismo, se logró determinar que el demandante cumplía un horario, según la diligencia de interrogatorio de parte, el cual se componía *"9 horas, con un receso a las 12 del día para tomar los alimentos, reiniciar a la 1 de la tarde y terminar a las 5 de la tarde del mismo día"*, también obran los cronogramas de actividades que debían realizarse por el demandante y ponerse en conocimiento del supervisor del contrato (fls. 162), en los cuales se destaca que ejercía sus labores de corrido durante 20 días del mes, sin diferenciar si era fin de semana o festivo, sin embargo, recalca la Sala que los 10 días restantes del mes no podía alejarse de las instalaciones del centro de salud, ya que así fue ordenado por la entidad en los contratos.

Si bien el cumplimiento del horario no es un factor determinante de la subordinación, sí es un criterio que, valorado junto con los demás aspectos de relación laboral ya decantados, permite inferir que en realidad existió una relación de carácter laboral. Adicionalmente el demandante debía asistir a los programas pedagógicos que dictaba la Entidad, tal como consta en las obligaciones pactadas

por el contratista así: *"Impartir capacitación, adiestramiento, inducción e instrucción al personal relacionado con el área y en desarrollo a los convenios docencia, prestación de servicios suscritos por la entidad"*, circunstancia que resulta contraria a la autonomía e independencia del contratista, siendo esa actividad una obligación propia de un empleador y no de una Entidad contratante.

De otro lado en el expediente obran calificaciones de los servicios que prestó el demandante como Médico, realizadas por el supervisor del contrato (fls. 155, 223, 231, 260, 265, 356), en las cuales se describe si cumplió o no con *"los trabajos asignados y en los tiempos establecidos"* y si se efectuaba *"una distribución adecuada de las actividades en el tiempo"*, lo anterior demuestra que el actor cumplía con las órdenes que le fueron impuestas por la entidad demandada, a través del supervisor del contrato, además recalca la Sala que todas las calificaciones el demandante superó el puntaje mínimo dispuesto por la entidad hospitalaria.

En ese orden de ideas, se descarta que la relación contractual se desarrolló en el marco de la coordinación, por cuanto se acreditó que el demandante recibió y cumplió órdenes impartidas por el Supervisor, que en la estructura de la E.S.E Carmen Emilia Ospina²³ cumplía el papel de superior jerárquico de la Zona en la que el actor realizaba sus actividades, tanto así que la denominación del cargo era *"JEFE DE PROCESOS AMBULATORIOS"* (fl. 275).

Si bien dicho jefe, no se encontraba en las instalaciones del centro hospitalario, en el cual el señor Fernando Sánchez Rivera ejercía su actividad como médico, dicha circunstancia no prueba que el demandante no estuviera supeditado a las órdenes impartidas por este o por la entidad contratista.

Igualmente precisa la Sala, que el Consejo de Estado ha señalado respecto a la subordinación de las personas que se encuentran vinculadas mediante contrato de prestación de servicios relacionadas con la Salud, que:

"Es claro para la Sala que el demandante no desarrolló labores ocasionales o temporales, para las cuales la Ley 80 de 1993 previó la figura del contrato de

prestación de servicios, por el contrario, el actor prestó el servicio público de salud en el Hospital Central de la Policía Nacional en las mismas condiciones que los demás empleados públicos, situación que conlleva a determinar que existió una verdadera relación laboral por la actividad que desarrollaba. Debe aclararse que el material probatorio obrante en el expediente, permite inferir que la administración pretendió evitar el pago de prestaciones sociales encubriendo la existencia de una verdadera relación laboral, por cuanto como se mencionó anteriormente, la subordinación y la dependencia se encuentran ínsitas en la labor que desarrollan (...) es decir, son consustanciales al servicio de la entidad".²⁴

En el mismo sentido, en sentencia del 21 de abril de 2016²⁵, la Alta Corporación precisó que:

*"La labor de Enfermera Jefe no puede considerarse prestada de forma autónoma porque **esta no puede definir en qué lugar presta sus servicios ni en qué horario, es más, su labor de coordinación de las demás enfermeras y la obligación de suministro de medicación y vigilancia de los pacientes no puede ser suspendida sino por justa causa, previamente informada, pues pondría en riesgo la prestación del servicio de salud, o sea, que existe una relación de subordinación.** En otras palabras, como ya lo ha señalado esta Corporación dada la naturaleza de las funciones se puede deducir la existencia de una prestación de servicios de forma subordinada amparable bajo la primacía de la realidad frente a las formas"²⁶.*

*Como se desprende de lo anterior, se ha considerado que la labor de enfermera no puede desempeñarse de forma autónoma, ya que quienes ejercen dicha profesión no pueden definir ni el lugar ni el horario en que prestan sus servicios. **Además de lo anterior, la actividad que desarrollan no se puede suspender sin justificación pues se pone en riesgo la prestación del servicio de salud.***

***Adicionalmente, se debe tener en consideración que en términos generales le corresponde a los médicos dictar las directrices y órdenes respecto de los cuidados especiales que requiere cada paciente, así como establecer condiciones respecto de cómo asistirlos en todo procedimiento médico y cómo se debe realizar el control de los pacientes en los centros de salud. Lo anterior implica que la relación entre médicos y enfermeras por lo general va más allá de la simple coordinación y pasa a ser de subordinación."** –
Negrilla fuera de texto-*

A partir de lo desarrollado, se concluye que la labor de las de las personas que prestan sus servicios en salud, por regla general se enmarca en una verdadera

²⁴ Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda - Subsección A. Consejo ponente: Luis Rafael Vergara Quintero - Bogotá, D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil catorce (2014).

²⁵ Consejo Ponente: Gabriel Valbuena Hernández. Radicación: 13001 23 31 000 2012 00233 01 (2820 - 2014)

²⁶ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de 3 de junio de 2010, Expediente No. 2384-07, Magistrado Ponente Bertha Lucia Ramírez.

relación laboral, pues no pueden por su propia voluntad suspender tal servicio, toda vez que afectarían derechos fundamentales de la comunidad.

En consecuencia, no le asiste razón a la apoderada de la entidad demandada, al señalar que el demandante no estaba subordinado, ni que dependía de la entidad, pues como se expuso recibía órdenes, cumplía con horarios y cronograma de actividades, debía estar disponible durante todo el tiempo del contrato a favor de la entidad, laboraba con los elementos asignados por la entidad, estaba obligado a asistir a capacitaciones y programadas académicas del Hospital y realizaba las mismas funciones que los médicos de planta de la E.S.E Carmen Emilia Ospina.

3.7.4. De la remuneración

Dicho elemento se encuentra acreditado con el pago de los honorarios que fueron pactados entre la entidad demandada y el señor Fernando Sánchez Rivera, los cuales se encuentran en las actas de finalización de cada contrato.

En suma, de una valoración integral y conjunta del material probatorio, la Sala concluye que el demandante desarrolló una relación permanente que corresponde a las funciones y objeto social de la E.S.E Carmen Emilia Ospina, trabajo éste que ejecutó sin autonomía ni independencia porque además cumplía con las metodologías y las órdenes del respectivo Supervisor; al igual que desarrollaba las labores en un horario que era controlado y percibía una remuneración mensual por sus servicios; por consiguiente, es claro que en el presente caso efectivamente existió una relación de carácter laboral que fue simulada tras un contrato de prestación de servicios, tal como lo afirmó el A-quo en la sentencia que se recurre.

Ahora bien, precisa la Sala que el A-quo ordenó como restablecimiento del derecho condenar a la Entidad demandada a *"reconocer y pagar a favor del señor FERNANDO SÁNCHEZ RIVERA, las prestaciones sociales, tomando como base para liquidarlas, el salario que devengaba un Médico General de planta de la entidad, o el valor de lo pactado en los contratos de*

prestación de servicios, *si aquel es inferior*, "decisión que se torna ambigua a criterio de la Corporación, pues no se acompasa con los criterios fijados por el Consejo de Estado, que se exponen a continuación:

En lo que se refiere al pago de las prestaciones que se reconocen como consecuencia de la nulidad del acto administrativo que niega la existencia de la relación laboral, el Tribunal de Cierre señaló en sentencia de unificación de 19 de febrero de 2009 que:

"La tesis que actualmente maneja esta Corporación al momento de indemnizar este tipo de controversias, se limita a condenar al pago de las prestaciones sociales ordinarias que devenga un empleado público en similar situación, pero liquidadas conforme se pactó en el contrato de prestación de servicios.

*Dicho argumento es justificado, en que como quien pretende demostrar el contrato realidad, no ostenta la calidad legal de empleado público, carece del derecho al pago de todas las prestaciones sociales a las que tendría derecho un servidor en estas condiciones"*²⁷

La anterior postura, fue retomada posteriormente por el Máximo órgano de lo Contencioso Administrativo, oportunidad en la que se consideró:

"Valga aclarar que, la Sala, ha acudido a los honorarios pactados, como punto de partida para la reparación de los daños en este tipo de controversias, siendo este el criterio imperante cuando el cargo desempeñado por el contratista no existe en la planta de personal, pues en razón a la inexistencia del cargo en la planta de personal, dichos emolumentos son la única forma de tasar objetivamente la indemnización de perjuicios, ya que de otra forma se incurría en subjetivismos por parte de la administración, a la hora de definir la identidad o equivalencia con otro empleo existente en la planta de la entidad, con el riesgo de reabrir la controversia al momento de ejecutar la sentencia.

*No obstante, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso, las Subsecciones A y B de la Sección Segunda, también han tenido en cuenta, de manera excepcional, como criterio para la reparación del daño, el salario devengado por un empleado de planta de la entidad, en aquellos casos en que se ha demostrado que el empleo desarrollado por el contratista demandante existe en la planta de personal y es desempeñado en igualdad de condiciones que los servidores públicos de planta"*²⁸, o cuando los honorarios pactados son inferiores al

²⁷ Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo. C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez. Radicación: 73001-23-31-000-2000-03449-01 (3074-05).

²⁸ Consejo de Estado. Sección Segunda Subsección B. C.P. Gerardo Arenas Monsalve. Sentencia de 27 de noviembre de 2014, Expediente: 05001-23-33-000-2012-00275-01, Referencia: 3222-2013 Actor DAVID ALEJANDRO JARAMILLO ARBELAEZ. Subsección A, sentencia de 4 de junio de 2009. Referencia 1221-08, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Subsección A, sentencia de 21 de octubre de 2009, referencia 2725-08, C.P. Luis Rafael Vergara.

salario devengado por un empleado de planta de la entidad con las mismas funciones desarrolladas (...).

En este orden de ideas, la Sala considera oportuno y necesario precisar cuál es el criterio imperante para el reconocimiento de la reparación de los daños derivados de la existencia del contrato realidad, dependiendo si las actividades contratadas bajo la modalidad de prestación de servicios son iguales a las funciones asignadas a empleos existentes en la planta de personal de la entidad o si no lo son, pues según el caso, el parámetro objetivo para la tasación de perjuicios podrá variar, en aplicación de los principios laborales de igualdad de oportunidades y remuneración proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, derivados del artículo 53 de la C.P.

En tal sentido, dirá la Sala que los honorarios pactados son el criterio imperante cuando el cargo desempeñado por el contratista no existe en la planta de personal, pues en razón a la inexistencia del cargo, dichos emolumentos son la única forma de tasar objetivamente la indemnización de perjuicios⁶⁹.

Finalmente, en sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016, en la que se analizó la manera como debe restablecerse el derecho en este tipo de controversias, indicó:

"Por consiguiente, no resulta procedente condenar a la agencia estatal demandada al pago de las prestaciones a las que tenía derecho el contratista-trabajador a título de reparación integral de perjuicios, dado que estas se reconocen como efecto de la anulación del acto que las negó, pese a su derecho a ser tratado en igualdad de condiciones que a los demás empleados públicos vinculados a través de una relación legal y reglamentaria, esto es, a pesar de tener una remuneración constituida por los honorarios pactados, le fue cercenado su derecho a recibir las prestaciones que le hubiere correspondido si la Administración no hubiese usado la modalidad de contratación estatal para esconder en la práctica una relación de trabajo.

(...)

Ahora bien, en lo que atañe al ingreso sobre el cual han de calcularse las prestaciones dejadas de percibir por el docente vinculado por contrato de prestación de servicios, cabe anotar que este corresponderá a los honorarios pactados, ya que no es dable tener en cuenta, en este caso, el empleo de planta (...)

De igual modo, se unifica la jurisprudencia en lo que atañe a que (i) el consecuente reconocimiento de las prestaciones por la nulidad del acto administrativo que niega la existencia de la relación laboral y del tiempo de servicios con fines pensionales proceden a título de restablecimiento del derecho, y (ii) el ingreso sobre el cual han de calcularse las prestaciones

⁶⁹ Consejo de Estado. Sección Segunda- Subsección "B". C.P. Gerardo Arenas Monsalvé. 4 de febrero de 2016. Radicación. 81001-23-33-000-2012-00020-01(0316-14).

*dejadas de percibir por el maestro-contratista corresponderá a los honorarios pactados*³⁹ **-Negrilla fuera de texto-**

De todo lo expuesto, es posible concluir que el reconocimiento de las prestaciones por la nulidad del acto administrativo que niega la existencia de la relación laboral debe hacerse a título de indemnización y que el ingreso sobre el cual han de calcularse las prestaciones dejadas de percibir por el contratista corresponde a los honorarios pactados, sin que en ningún caso pueda tenerse en cuenta los rubros percibidos por el personal de planta de la entidad que se condena.

Por lo anterior, deberá ser modificado el restablecimiento del derecho ordenado por el Juzgado Segundo Administrativo de Neiva, en el sentido de condenar a la entidad a cancelar al demandante las prestaciones sociales, tomando como base para liquidarlas el valor de lo pactado en cada uno de los contratos de prestación de servicios suscritos, sin tener en cuenta lo percibido por el personal de planta de la Entidad.

En consecuencia, el problema jurídico se resolverá en el sentido de modificar el numeral 3º y confirmar en todo lo demás la sentencia proferida el 20 de octubre de 2017 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva, que accedió a las pretensiones de la demanda.

IV. COSTAS

4.1.- Costas en primera instancia

En la sentencia de primera instancia, el *A quo* decidió imponer condena en costas a la parte demandada, decisión sobre la cual no se presentó ningún reparo, por lo tanto, se mantendrá incólume dicha orden.

4.2.- Costas en segunda instancia

³⁹ Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Segunda. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. 25 de agosto de 2016. (0088-15)CE-SUJ2-005-16

En relación con la procedencia de emitir condena en costas, es preciso señalar que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, el legislador abandonó el criterio subjetivo que venía imperando en materia de condena en costas³¹ para acoger, en principio, la valoración objetiva frente a su imposición, liquidación y ejecución, tal y como se advierte de lo dispuesto en el artículo 188 de dicho estatuto³², preceptiva que remite a las normas del Código General del Proceso, normativa que en su artículo 365³³ consagra los elementos que determinan la imposición de costas así: i) objetivo en cuanto a que toda sentencia decidirá sobre las costas procesales, bien sea para condenar total o parcialmente o, en su defecto, para abstenerse y ii) valorativo en el entendido de que el juez debe verificar que las costas se causaron con el pago de gastos ordinarios y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso.

El artículo 365 del C.G.P. (Ley 1564 de 2012), señala las reglas para la determinación de la condena en costas, así:

"(...) 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva de desfavorablemente el recurso apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además en los casos especiales previstos en este código.

Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.

(...) 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará en costas al recurrente en las costas de segunda.

(...) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.

(...)" (Resaltado por la Sala).

³¹ erogaciones económicas que se constituyen en los gastos en que incurre una parte a lo largo del proceso en aras de sacar adelante la posición que detenta, tales como gastos ordinarios, cauciones, honorarios a auxiliares de la justicia, publicaciones, viáticos, entre otros; que encuadran en lo que se denomina como expensas. Así mismo, se comprenden los honorarios del abogado, que en el argot jurídico son las agencias en derecho. (Artículos 361 y ss. CGP).

³² ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil."

³³ Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda- Subsección B, sentencia del 27 de enero de 2017, Radicación: 54001-23-33-000-2012-00053-01(2400-14), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter; Sección Cuarta, Consejero Ponente: Julio Roberto Piza Rodríguez, providencia del 21 de junio de 2018, radicación número: 05001-23-33-000-2012-00148-01(21698); Sección Cuarta, Consejero Ponente: Milton Chaves García, sentencia de 21 de junio de 2018, radicación número: 19001-23-33-000-2013-00442-01(22017); Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: William Hernández Gómez, providencia de 5 de julio de 2018, radicación Número: 11001-03-15-000-2018-01606-00(Ac); providencia del 27 de enero de 2017, proferida dentro del expediente con radicación número: 54001-23-33-000-2012-00053-01(2400-14); providencia del ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018), radicación: 25000234200020120074201 (3695-2016)

De lo anterior cabe resaltar que, según el citado numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), ***"Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación"***.

Precisado lo anterior, se advierte que en este caso, pese a que hay lugar a confirmar la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda, no habrá lugar a imponer condena en costas contra la parte demandada, toda vez que, una vez examinado el expediente, la Sala no encuentra elementos de prueba que demuestren o justifiquen que en el presente caso efectivamente se hayan ocasionado erogaciones por la parte demandada, a quien se le resolvió favorablemente la presente Litis, que hagan procedente la imposición de costas.

En efecto, al expediente no se allegaron medios de prueba que acrediten que con ocasión del presente proceso la demandada haya tenido que asumir gastos, o cualquier otra expensa susceptible de ser reconocida. Tampoco se allegó contrato de prestación de servicios profesionales o algún otro documento que acredite la causación de agencias en derecho en el curso del proceso, razón por la cual, no resulta procedente la imposición de costas.

En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

V. FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR el numeral TERCERO la sentencia dictada el 20 de octubre de 2017, por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva, el cual quedara así:

TERCERO: CONDENAR a la E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA, a título de restablecimiento del derecho, a reconocer y pagar a favor del señor FERNANDO SÁNCHEZ RIVERA, las prestaciones sociales, tomando como base para liquidarlas, el valor de lo pactado en cada uno de los contratos de prestación de servicios, correspondientes a los períodos en los cuales se demostró la existencia de la

relación laboral, es decir, del 17 de noviembre de 2010 al 20 de enero de 2012 y del 2 de febrero de 2012 al 29 de febrero de 2012.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia dictada el 20 de octubre de 2017, por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva, que accedió a las pretensiones de la demanda interpuesta por el señor Fernando Sánchez Rivera en contra de la E.S.E Carmen Emilia Ospina.

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.

CUARTO: En firme esta providencia, devuélvase el expediente al juzgado de origen, una vez hechas las anotaciones en el software de gestión.

CÓPIESE, NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

Se hace constar que la anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.


BEATRIZ TERESA GALVIS BUSTOS
Magistrada


GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA
Magistrado


JOSÉ MILLER LUGO BARRERO
Magistrado